

Códigos electrónicos

Constitución Española

La Costituzione Spagnola

Edición actualizada a 19 de febrero de 2024

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO



La última versión de este Código en PDF y ePUB está disponible para su descarga **gratuita** en:
www.boe.es/biblioteca_juridica/

Alertas de actualización en Mi BOE: www.boe.es/mi_boe/

Para adquirir el Código en formato papel: tienda.boe.es



Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0).

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

NIPO (PDF): 007-16-047-5

NIPO (ePUB): 007-16-048-0

NIPO (Papel): 007-16-049-6

ISBN: 978-84-340-2284-3

Depósito Legal: M-7193-2016

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado
cpage.mpr.gob.es

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avenida de Manoteras, 54
28050 MADRID
www.boe.es



SUMARIO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

§ 1. Constitución Española	1
----------------------------------	---

LA COSTITUZIONE SPAGNOLA

§ 2. La Costituzione Spagnola	38
-------------------------------------	----

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

§ 1. Constitución Española	1
<i>Preámbulo</i>	1
TÍTULO PRELIMINAR	1
TÍTULO I. De los derechos y deberes fundamentales	3
CAPÍTULO PRIMERO. De los españoles y los extranjeros	3
CAPÍTULO SEGUNDO. Derechos y libertades	3
Sección 1. ^a De los derechos fundamentales y de las libertades públicas	3
Sección 2. ^a De los derechos y deberes de los ciudadanos	7
CAPÍTULO TERCERO. De los principios rectores de la política social y económica	8
CAPÍTULO CUARTO. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales	10
CAPÍTULO QUINTO. De la suspensión de los derechos y libertades	10
TÍTULO II. De la Corona	11
TÍTULO III. De las Cortes Generales	13
CAPÍTULO PRIMERO. De las Cámaras	13
CAPÍTULO SEGUNDO. De la elaboración de las leyes	16
CAPÍTULO TERCERO. De los Tratados Internacionales	18
TÍTULO IV. Del Gobierno y de la Administración	18
TÍTULO V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales	20
TÍTULO VI. Del Poder Judicial	22
TÍTULO VII. Economía y Hacienda	24
TÍTULO VIII. De la Organización Territorial del Estado	26
CAPÍTULO PRIMERO. Principios generales	26
CAPÍTULO SEGUNDO. De la Administración Local	27
CAPÍTULO TERCERO. De las Comunidades Autónomas	27
TÍTULO IX. Del Tribunal Constitucional	33
TÍTULO X. De la reforma constitucional	34
DISPOSICIONES ADICIONALES	35
DISPOSICIONES TRANSITORIAS	35
DISPOSICION DEROGATORIA	37
DISPOSICION FINAL	37

LA COSTITUZIONE SPAGNOLA

§ 2. La Costituzione Spagnola	38
PREAMBOLO	38
TITOLO PRELIMINARE	38
TITOLO I. Dei Diritti e Doveri Fondamentali	40
CAPITOLO PRIMO. Degli Spagnoli e degli stranieri	40
CAPITOLO SECONDO. Diritti e libertà	40
Sezione prima. Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche	40
Sezione seconda. Dei diritti e dei doveri dei cittadini	43
CAPITOLO TERZO. Dei principi che reggono la politica sociale ed economica	45
CAPITOLO QUARTO. Delle garanzie delle libertà dei diritti fondamentali	47
CAPITOLO QUINTO. Della sospensione dei diritti e delle libertà	47
TITOLO II. Della Corona	47
TITOLO III. Delle Cortes Generali	50
CAPITOLO PRIMO. Delle Camere	50

ÍNDICE SISTEMÁTICO

CAPITOLO SECONDO. Della elaborazione delle leggi	53
CAPITOLO TERZO. Dei trattati internazionali	55
TITOLO IV. Del Governo e della Amministrazione	56
TITOLO V. Delle relazioni tra il Governo e le Cortes Generali	57
TITOLO VI. Del Potere Giudiziario	59
TITOLO VII. Economia e finanza	61
TITOLO VIII. Della organizzazione territoriale dello Stato	63
CAPITOLO PRIMO. Principi Generali	63
CAPITOLO SECONDO. Della Amministrazione Locale	64
CAPITOLO TERZO. Delle Comunità Autonome	64
TITOLO IX. Del Tribunale Costituzionale	70
TITOLO X. Della revisione Costituzionale	71
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE	72
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	72
DISPOSIZIONE ABROGATIVA	74
DISPOSIZIONE FINALE	74

§ 1**Constitución Española**

Cortes Generales

«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978

Última modificación: 17 de febrero de 2024

Referencia: BOE-A-1978-31229

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN**TÍTULO PRELIMINAR****Artículo 1.**

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

§ 1 Constitución Española

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Artículo 3.

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Artículo 4.

1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.

2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Artículo 5.

La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6.

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 7.

Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Artículo 8.

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I

De los derechos y deberes fundamentales

Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO

De los españoles y los extranjeros

Artículo 11.

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12.

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

Artículo 13.

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.

2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

CAPÍTULO SEGUNDO

Derechos y libertades

Artículo 14.

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas

Artículo 15.

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida

§ 1 Constitución Española

la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Artículo 19.

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20.

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

§ 1 Constitución Española

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Artículo 21.

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22.

1. Se reconoce el derecho de asociación.

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Artículo 23.

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Artículo 24.

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25.

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales

§ 1 Constitución Española

de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26.

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27.

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.

5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Artículo 28.

1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29.

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.

2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

§ 1 Constitución Española

Sección 2.^a De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30.

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Artículo 31.

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32.

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33.

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Artículo 34.

1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

Artículo 35.

1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36.

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37.

1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

§ 1 Constitución Española

2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 38.

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

CAPÍTULO TERCERO

De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39.

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40.

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41.

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42.

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.

Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

§ 1 Constitución Española

Artículo 44.

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45.

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46.

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.

Artículo 47.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48.

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49.

1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Artículo 51.

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

§ 1 Constitución Española

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52.

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO

De las garantías de las libertades y derechos fundamentales

Artículo 53.

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54.

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO

De la suspensión de los derechos y libertades

Artículo 55.

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

§ 1 Constitución Española

TÍTULO II

De la Corona

Artículo 56.

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 57.

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.

5. Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Artículo 58.

La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Artículo 59.

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.

2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.

3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.

4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.

5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60.

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo

§ 1 Constitución Española

nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61.

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Artículo 62.

Corresponde al Rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
- i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63.

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.

2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.

3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64.

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65.

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

§ 1 Constitución Española

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO

De las Cámaras

Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67.

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.

Artículo 68.

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.

4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.

La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.

6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Artículo 69.

1. El Senado es la Cámara de representación territorial.

2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.

5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea

§ 1 Constitución Española

legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.

Artículo 70.

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:

- a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
- b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno.
- c) Al Defensor del Pueblo.
- d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
- e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
- f) A los miembros de las Juntas Electorales.

2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71.

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculcados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.

Artículo 72.

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Artículo 73.

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.

Artículo 74.

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.

§ 1 Constitución Española

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

Artículo 75.

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 76.

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.

Artículo 77.

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.
2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.

Artículo 78.

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintinueve miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.

Artículo 79.

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

§ 1 Constitución Española

Artículo 80.

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO

De la elaboración de las leyes

Artículo 81.

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Artículo 82.

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.

Artículo 83.

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

- a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
- b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

Artículo 84.

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Artículo 85.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.

Artículo 86.

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades

§ 1 Constitución Española

de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

Artículo 87.

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Artículo 88.

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.

Artículo 89.

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición.

Artículo 90.

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.

3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.

Artículo 91.

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Artículo 92.

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.

§ 1 Constitución Española

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.

3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución.

CAPÍTULO TERCERO

De los Tratados Internacionales

Artículo 93.

Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

Artículo 94.

1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:

- a) Tratados de carácter político.
- b) Tratados o convenios de carácter militar.
- c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
- d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.

Artículo 95.

1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.

2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.

Artículo 96.

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.

TÍTULO IV

Del Gobierno y de la Administración

Artículo 97.

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

§ 1 Constitución Española

Artículo 98.

1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley.

2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.

3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.

4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.

Artículo 99.

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.

3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.

5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

Artículo 100.

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.

Artículo 101.

1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 102.

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo.

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.

Artículo 103.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.

§ 1 Constitución Española

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 104.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Artículo 105.

La ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.

Artículo 106.

1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.

2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 107.

El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

TÍTULO V

De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

Artículo 108.

El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Artículo 109.

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 110.

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.

§ 1 Constitución Española

Artículo 111.

1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.

2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112.

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

Artículo 113.

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

Artículo 114.

1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.

2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.

Artículo 115.

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.

2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.

3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5.

Artículo 116.

1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.

2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.

3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

§ 1 Constitución Española

4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.

5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TÍTULO VI

Del Poder Judicial

Artículo 117.

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 119.

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Artículo 120.

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.

§ 1 Constitución Española

Artículo 121.

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

Artículo 122.

1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Artículo 123.

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

Artículo 124.

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Artículo 125.

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

Artículo 126.

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

Artículo 127.

1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La

§ 1 Constitución Española

ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TÍTULO VII

Economía y Hacienda

Artículo 128.

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

Artículo 129.

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Artículo 130.

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

Artículo 131.

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.

Artículo 132.

1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.

2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

Artículo 133.

1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.

§ 1 Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Artículo 134.

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.

Artículo 135.

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:

a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.

§ 1 Constitución Española

- b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
- c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.

Artículo 136.

1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.

Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.

El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.

4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO

Principios generales

Artículo 137.

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Artículo 138.

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Artículo 139.

1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

§ 1 Constitución Española

CAPÍTULO SEGUNDO

De la Administración Local

Artículo 140.

La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

Artículo 141.

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142.

Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO

De las Comunidades Autónomas

Artículo 143.

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

Artículo 144.

Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial.

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

§ 1 Constitución Española

Artículo 145.

1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Artículo 146.

El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
 - a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
 - b) La delimitación de su territorio.
 - c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
 - d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148.

1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
 - 1.^a Organización de sus instituciones de autogobierno.
 - 2.^a Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.
 - 3.^a Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
 - 4.^a Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
 - 5.^a Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
 - 6.^a Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
 - 7.^a La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
 - 8.^a Los montes y aprovechamientos forestales.
 - 9.^a La gestión en materia de protección del medio ambiente.
 - 10.^a Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
 - 11.^a La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
 - 12.^a Ferias interiores.
 - 13.^a El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.
 - 14.^a La artesanía.
 - 15.^a Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.

§ 1 Constitución Española

- 16.^a Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
- 17.^a El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
- 18.^a Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
- 19.^a Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
- 20.^a Asistencia social.
- 21.^a Sanidad e higiene.
- 22.^a La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.

Artículo 149.

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1.^a La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2.^a Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3.^a Relaciones internacionales.

4.^a Defensa y Fuerzas Armadas.

5.^a Administración de Justicia.

6.^a Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

7.^a Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.

8.^a Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial.

9.^a Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

10.^a Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.

11.^a Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.

12.^a Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.

13.^a Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

14.^a Hacienda general y Deuda del Estado.

15.^a Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

16.^a Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.

17.^a Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

18.^a Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.

19.^a Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades Autónomas.

§ 1 Constitución Española

20.^a Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves.

21.^a Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.

22.^a La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.

23.^a Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

24.^a Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

25.^a Bases de régimen minero y energético.

26.^a Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

27.^a Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.

28.^a Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

29.^a Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

30.^a Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

31.^a Estadística para fines estatales.

32.^a Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Artículo 150.

1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.

2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

§ 1 Constitución Española

3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Artículo 151.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1.º El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2.º Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3.º Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4.º Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5.º De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior.

3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los

§ 1 Constitución Española

supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo 153.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.

b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.

c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.

Artículo 154.

Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.

Artículo 155.

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Artículo 156.

1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.

2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.

Artículo 157.

1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

e) El producto de las operaciones de crédito.

§ 1 Constitución Española

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.

3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado.

Artículo 158.

1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.

2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

TÍTULO IX

Del Tribunal Constitucional

Artículo 159.

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

En lo demás los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial.

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.

Artículo 160.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Artículo 161.

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

§ 1 Constitución Española

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

Artículo 162.

1. Están legitimados:

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.

Artículo 163.

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

Artículo 164.

1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.

2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.

Artículo 165.

Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TÍTULO X

De la reforma constitucional

Artículo 166.

La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.

Artículo 167.

1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

§ 1 Constitución Española

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168.

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Artículo 169.

No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Segunda.

La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado.

Tercera.

La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico.

Cuarta.

En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.

En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales o a los órganos interinsulares correspondientes.

Segunda.

Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se

§ 1 Constitución Española

prevé en el apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.

Tercera.

La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.

Cuarta.

1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.

Quinta.

Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144.

Sexta.

Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Séptima.

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:

a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.

c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Octava.

1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.

2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo.

§ 1 Constitución Española

Durante este período, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.

3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo 70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69,3.

Novena.

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

DISPOSICION DEROGATORIA

1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.

2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.

3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

DISPOSICION FINAL

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.

§ 2

La Costituzione Spagnola

Cortes Generales
«BOE» núm. 311, de 29 de diciembre de 1978
Última modificación: 17 de febrero de 2024
Referencia: BOE-A-1978-31229-IT

Juan Carlos I, Re di Spagna, a tutti coloro che la presente vedono e intendano,
Fa sapere: Che le Cortes hanno approvato e il popolo spagnolo ha ratificato la seguente Costituzione:

PREAMBOLO

La nazione spagnola, desiderando stabilire la giustizia, la libertà e la sicurezza e promuovere il bene di quanti la compongono, nell'uso della sua sovranità, proclama la sua volontà di:

Garantire la convivenza democratica nell'ambito della Costituzione e delle leggi conformemente a un ordine economico e sociale giusto;

Consolidare uno Stato di diritto che assicuri la supremazia della legge come espressione della volontà popolare;

Proteggere tutti gli spagnoli e i popoli della Spagna nell'esercizio dei diritti umani, le loro culture e tradizioni, lingue e istituzioni;

Promuovere il progresso della cultura e dell'economia in modo da assicurare a tutti una dignitosa qualità di vita;

Realizzare una società democratica progredita e collaborare al rafforzamento di relazioni pacifiche e ad un'efficace collaborazione fra tutti i popoli della terra.

Di conseguenza, le Cortes approvano e il popolo spagnolo ratifica la seguente:

COSTITUZIONE

TITOLO PRELIMINARE

Articolo 1.

1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'uguaglianza e il pluralismo politico.

2. La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.

3. La forma politica dello Stato spagnolo è la Monarchia parlamentare.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 2.

La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime.

Articolo 3.

1. Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.

2. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti.

3. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

Articolo 4.

1. La bandiera spagnola è formata da tre bande orizzontali, rossa, gialla e rossa, essendo quella gialla di larghezza doppia di ognuna di quelle rosse.

2. Gli Statuti potranno riconoscere bandiere ed emblemi propri delle Comunità Autonome. Questi si utilizzeranno insieme alla bandiera spagnola sui loro edifici pubblici e nei loro atti ufficiali.

Articolo 5.

La capitale dello Stato spagnolo è la città di Madrid.

Articolo 6.

I partiti politici esprimono il pluralismo politico, concorrono alla formazione e manifestazione della volontà popolare e sono strumento fondamentale per la partecipazione politica.

La loro creazione e l'esercizio della loro attività sono libere nel rispetto della Costituzione e della legge.

La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere democratici.

Articolo 7.

I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali contribuiscono alla difesa e alla promozione degli interessi economico-sociali loro propri. La loro costituzione e l'esercizio delle loro attività sono liberi nel rispetto della Costituzione e della legge. La loro struttura interna e il loro operare dovranno essere democratici.

Articolo 8.

1. Le Forze Armate, costituite dall' Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, hanno come missione di garantire la sovranità e l'indipendenza della Spagna, difenderne l'integrità territoriale e l'ordinamento costituzionale.

2. Una legge organica regolerà i fondamenti della organizzazione militare conformemente ai principi della presente Costituzione.

Articolo 9.

1. I cittadini e i poteri pubblici sono soggetti alla Costituzione e al rimanente ordinamento giuridico.

2. Compete ai pubblici poteri promuovere le condizioni affinché la libertà e l'eguaglianza dell'individuo e dei gruppi cui partecipa siano reali ed effettivi; rimuovere gli ostacoli che impediscono o rendono difficile la loro realizzazione e agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale.

3. La Costituzione garantisce il principio di legalità, la gerarchia normativa, la pubblicità delle norme, la irretroattività delle disposizioni sanzionatorie sfavorevoli o restrittive dei diritti soggettivi, la sicurezza giuridica, la responsabilità e il divieto dell'arbitrio dei pubblici poteri.

§ 2 La Costituzione Spagnola

TITOLO I

Dei Diritti e Doveri Fondamentali

Articolo 10.

1. La dignità della persona, i diritti inviolabili che le sono connaturati, il libero sviluppo della personalità, il rispetto della legge e dei diritti altrui sono fondamento dell'ordine politico e della pace sociale.

2. Le norme relative ai diritti fondamentali e alla libertà, riconosciute dalla Costituzione, s'interpreteranno in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e ai Trattati e Accordi internazionali nelle stesse materie ratificate dalla Spagna.

CAPITOLO PRIMO

Degli Spagnoli e degli stranieri

Articolo 11.

1. La nazionalità spagnola si acquista, si conserva e si perde conformemente a quanto stabilito dalla legge.

2. Nessun cittadino di origine spagnola potrà essere privato della sua nazionalità.

3. Lo Stato potrà concordare trattati sulla doppia nazionalità con i paesi ibero-americani o con quelli che abbiano mantenuto o che mantengono particolari legami con la Spagna. In questi stessi paesi, quantunque non riconoscano ai propri cittadini un diritto di reciprocità, gli spagnoli potranno naturalizzarsi senza perdere la nazionalità originaria.

Articolo 12.

Gli spagnoli acquistano la maggiore età a 18 anni.

Articolo 13.

1. Gli stranieri godranno in Spagna delle libertà pubbliche garantite dal presente titolo nei termini stabiliti dai trattati e dalla legge.

2. Solamente gli spagnoli saranno titolari dei diritti riconosciuti nell'art. 23, salvo che, attenendosi a criteri di reciprocità, si possa stabilire per trattato o per legge il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali.

3. L'extradizione si concederà solo in conformità di un trattato o della legge, attenendosi al principio di reciprocità. Rimangono esclusi dall'extradizione i delitti politici, non considerandosi come tali gli atti di terrorismo.

4. La legge stabilirà i limiti entro cui i cittadini di altri paesi e gli apolidi potranno godere del diritto di asilo in Spagna.

CAPITOLO SECONDO

Diritti e libertà

Articolo 14.

Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, senza che prevalga alcuna discriminazione per motivi di nascita, razza, sesso, religione, opinione e qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale.

Sezione prima. Dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche

Articolo 15.

Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità fisica e morale, senza poter essere in alcun caso sottoposti a torture nè a pene o trattamenti inumani o degradanti. E' abolita la pena di morte, salvo quanto possano disporre leggi penali militari in tempo di guerra.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 16.

1. E' garantita la libertà ideologica, religiosa y di culto dei singoli e delle comunità senza altra limitazione, nelle loro manifestazioni, che quelle necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico garantito dalla legge.

2. Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare la proprie ideologia, religione o convinzioni.

3. Nessuna confessione avrà carattere statale. I pubblici poteri terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa Cattolica e le altre confessioni.

Articolo 17.

1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà se non con l'osservanza di quanto stabilito in questo articolo e nei casi e nella forma previsti dalla legge.

2. La detenzione preventiva non potrà durare più del tempo strettamente necessario per la realizzazione degli accertamenti tendenti al chiarimento dei fatti, e in ogni caso il detenuto dovrà essere messo in libertà o a disposizione dell'autorità giudiziaria nel termine massimo di 72 ore.

3. Ogni persona detenuta deve essere informata immediatamente e in modo comprensibile dei propri diritti e delle ragioni della sua detenzione, non potendo essere obbligata a fare ammissioni. E' garantita al detenuto l'assistenza di un avvocato negli adempimenti di polizia e giudiziari, nei termini stabiliti dalla legge.

4. La legge disciplinerà un procedimento di Habeas Corpus per ottenere l'immediata messa a disposizione del giudice di qualsiasi persona detenuta illegalmente. Similmente, a mezzo di legge sarà determinato il termine massimo di carcerazione provvisoria.

Articolo 18.

1. E' garantito il diritto all'onore, all'intimità personale e familiare e alla propria immagine.

2. Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione giudiziaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato.

3. E' garantito il segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo decisione giudiziale.

4. La legge porrà limiti all'uso dell'informatica per salvaguardare l'onore e l'intimità personale e familiare dei cittadini e il pieno esercizio dei loro diritti.

Articolo 19.

Gli spagnoli hanno diritto di scegliere liberamente la loro residenza e di circolare sul territorio nazionale. Similmente hanno diritto di entrare e uscire liberamente dalla Spagna nei termini stabiliti dalla legge. Questo diritto non potrà essere limitato per motivi politici o ideologici.

Articolo 20.

Si riconoscono e tutelano i diritti:

a) a esprimere e diffondere liberamente il pensiero, le idee e le opinioni per mezzo della parola, degli scritti o con qualunque altro mezzo di riproduzione;

b) alla produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica;

c) alla libertà di insegnamento;

d) a comunicare o ricevere liberamente informazioni veritiere attraverso qualsiasi mezzo di diffusione. La legge regolerà il diritto alla clausola di coscienza e il segreto professionale nell'esercizio di tale libertà.

2. L'esercizio di questi diritti non può essere ristretto da nessun tipo di censura preventiva.

3. La legge regolerà l'organizzazione e la verifica parlamentaria dei mezzi di comunicazione sociali controllati dallo Stato o da qualsiasi ente pubblico e garantirà l'accesso

§ 2 La Costituzione Spagnola

a detti mezzi da parte dei gruppi sociali e politici significativi, rispettando il pluralismo della società e delle diverse lingue della Spagna.

4. Queste libertà hanno i loro limiti nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo titolo, nei precetti delle leggi che lo attuano, e specialmente nel diritto all'onore, all'intimità, alla propria immagine e alla protezione della gioventù e dell'infanzia.

5. Il sequestro di pubblicazioni, registrazioni e altri mezzi d'informazione potrà essere concesso soltanto in base a provvedimento giudiziale.

Articolo 21.

1. Si riconosce il diritto di riunione pacifica e senza armi. L'esercizio di questo diritto non necessiterà previa autorizzazione.

2. Nei casi di riunione in luogo pubblico e di manifestazioni dovrà essere data comunicazione preventiva all'autorità, che potrà proibirla soltanto quando esistano ragioni fondate di turbativa dell'ordine pubblico, con pericolo per persone o cose.

Articolo 22.

1. Si riconosce il diritto di associazione.

2. Le associazioni che perseguono finalità o utilizzino modalità qualificate come reato sono illegali.

3. Le associazioni costituite nel rispetto di questo articolo dovranno essere registrate soltanto agli effetti della pubblicità.

4. Le associazioni potranno essere sciolte o sospese dalla loro attività in virtù di provvedimento giudiziale motivato.

5. Sono proibite le associazioni segrete e quelle di carattere paramilitare.

Articolo 23.

1. I cittadini hanno il diritto di partecipare alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti, liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.

2. Similmente hanno il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza a funzioni e incarichi pubblici con i requisiti indicati dalle leggi.

Articolo 24.

1. Tutte le persone hanno il diritto di ottenere tutela effettiva dai giudici e dai tribunali nell'esercizio dei loro diritti e interessi legittimi senza che, in nessun caso, possa verificarsi la mancanza di difesa.

2. Similmente tutti hanno diritto al giudice naturale predeterminato dalla legge, al patrocinio legale, a essere informati dell'accusa formulata contro di loro, a un processo pubblico senza indebite dilazioni e con tutte le garanzie, a utilizzare i mezzi di prova pertinenti alla loro difesa, a non fare ammissioni contro se medesimi, a non confessare la propria colpevolezza e alla presunzione di innocenza.

La legge regolerà casi in cui a causa di parentela o di segreto professionale non sussisterà obbligo a rendere dichiarazioni circa presunti reati.

Articolo 25.

1. Nessuno può essere condannato o punito per azioni o omissioni che nel momento in cui si verificano non costituiscono reato, omissione o infrazione amministrativa, secondo la legislazione vigente in quel momento.

2. Le pene limitative della libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale e non potranno consistere in lavori forzati. Il condannato a pena detentiva che stia scontando la medesima godrà dei diritti fondamentali previsti in questo capitolo, eccezion fatta di quelli che siano espressamente limitati dal contenuto della sentenza di condanna, dalla finalità della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso avrà diritto ad un lavoro remunerato e alle connesse prestazioni di sicurezza sociale così come all'accesso agli strumenti culturali e allo sviluppo completo della sua personalità.

§ 2 La Costituzione Spagnola

3. L'amministrazione civile non potrà imporre sanzioni che direttamente o sussidiariamente implicino privazione di libertà.

Articolo 26.

Sono vietati i Giuri d'Onore nell'ambito dell'amministrazione civile e delle organizzazioni professionali.

Articolo 27.

1. Tutti hanno il diritto all'educazione. Si riconosce la libertà d'insegnamento.

2. L'educazione avrà per oggetto il pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza e delle libertà fondamentali.

3. I pubblici poteri garantiscono il diritto che spetta ai genitori affinché i propri figli ricevano una formazione religiosa e morale che sia in accordo con le proprie convinzioni.

4. L'insegnamento elementare è obbligatorio e gratuito.

5. I pubblici poteri garantiscono a tutti il diritto all'educazione mediante una programmazione generale dell'insegnamento, con partecipazione effettiva di tutti i settori interessati e la costituzione di centri di insegnamento.

6. Si riconosce alle persone fisiche e giuridiche la libertà di creare enti d'insegnamento nel rispetto dei principi costituzionali.

7. I docenti, i genitori e, se del caso, gli alunni interverranno nel controllo e nella gestione di tutti i centri sostenuti dall'Amministrazione con fondi pubblici nei termini che la legge stabilisce.

8. I pubblici poteri svolgeranno verifiche e rilasceranno approvazioni quanto al sistema educativo al fine di assicurare il rispetto delle leggi.

9. I pubblici poteri sosterranno i centri d'istruzione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge.

10. Si riconosce l'autonomia delle Università nei termini stabiliti dalla legge.

Articolo 28.

1. Tutti hanno diritto di associarsi liberamente in sindacati. La legge potrà limitare o stabilire eccezioni all'esercizio di questo diritto per le Forze o Corpi Armati sottoposti a disciplina militare e regolerà le peculiarità di questo esercizio per i funzionari pubblici.

La libertà sindacale comprende il diritto a costituire sindacati così come il diritto dei sindacati a formare confederazioni e a costituire organizzazioni sindacali internazionali e ad affiliarsi alle stesse. Nessuno potrà essere obbligato ad iscriversi a un sindacato.

2. Si riconosce il diritto di sciopero dei lavoratori per la difesa dei loro interessi. La legge che regola l'esercizio di questo diritto stabilirà precise garanzie per assicurare il mantenimento dei servizi essenziali della comunità.

Articolo 29.

1. Tutti gli spagnoli avranno diritto di petizione individuale e collettiva per iscritto, nella forma e con gli effetti che la legge determina.

2. I membri delle Forze e Corpi Armati o dei Corpi sottoposti a disciplina militare potranno esercitare tale diritto soltanto individualmente e con rispetto di quanto previsto nella legislazione che li concerne.

Sezione seconda. Dei diritti e dei doveri dei cittadini

Articolo 30.

1. Gli spagnoli hanno il diritto e il dovere di difendere la Spagna.

2. La legge fisserà gli obblighi militari degli spagnoli e regolerà, con le debite garanzie, l'obiezione di coscienza, così come le ulteriori cause di esenzione dal servizio militare obbligatorio, potendo imporre in tal caso una prestazione sociale sostitutiva.

3. Si potrà stabilire un servizio civile per il raggiungimento di finalità d'interesse generale.

§ 2 La Costituzione Spagnola

4. Mediante legge potranno regolarsi i doveri dei cittadini nei casi di grave pericolo, catastrofe o calamità pubblica.

Articolo 31.

1. Tutti contribuiranno a sostenere le spese pubbliche in conformità con le loro capacità economiche mediante un sistema tributario giusto, ispirato ai principi di uguaglianza e progressività che, in nessun caso, avrà finalità espropriativa.

2. La spesa pubblica realizzerà una equa assegnazione delle risorse pubbliche e la sua programmazione ed esecuzione risponderà ai criteri di efficienza ed economicità.

3. Potranno stabilirsi prestazioni personali o patrimoniali di carattere pubblico soltanto conformemente alla legge.

Articolo 32.

1. L'uomo e la donna hanno il diritto di contrarre matrimonio in piena uguaglianza giuridica.

2. La legge regolerà le modalità del matrimonio, l'età e la capacità per contrarlo, i diritti e i doveri dei coniugi, le cause di separazione e scioglimento e i loro effetti.

Articolo 33.

1. Si riconosce il diritto alla proprietà privata e alla successione ereditaria.

2. La funzione sociale di questi diritti delimiterà il loro contenuto conformemente alle leggi.

3. Nessuno potrà essere privato dei propri beni e diritti se non per causa giustificata di pubblica utilità o nell'interesse sociale, mediante corrispondente indennizzo, e conformemente a quanto disposto dalle leggi.

Articolo 34.

1. Si riconosce il diritto di fondazione per finalità d'interesse generale, conformemente alla legge.

2. Vigerà anche per le fondazioni il disposto dei comma 2 e 4 dell'articolo 22.

Articolo 35.

1. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta di professione e ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a una remunerazione sufficiente per soddisfare le necessità loro e della loro famiglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di sesso.

2. La legge regolerà uno statuto dei lavoratori.

Articolo 36.

La legge regolerà le peculiarità proprie del regime giuridico degli Ordini Professionali e l'esercizio delle professioni autorizzate. La struttura interna e il funzionamento degli Ordini dovranno rispondere a principi democratici.

Articolo 37.

1. La legge garantirà il diritto alla contrattazione collettiva fra i rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori, così come la forza vincolante degli accordi.

2. Si riconosce il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro ad adottare mezzi di conflitto collettivo. La legge che disciplina l'esercizio di questo diritto, senza pregiudizio dei limiti che possa stabilire, conterrà garanzie necessarie per assicurare il funzionamento dei servizi essenziali della comunità.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 38.

Si riconosce la libertà d'impresa nel quadro dell'economia di mercato. I pubblici poteri garantiscono e proteggono il suo esercizio e la difesa della produttività, in accordo con le esigenze dell'economia generale e, se del caso, della pianificazione.

CAPITOLO TERZO

Dei principi che reggono la politica sociale ed economica

Articolo 39.

1. I pubblici poteri assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia.
2. I pubblici poteri assicurano anche la protezione integrale dei figli, uguali questi di fronte alla legge a prescindere dalla filiazione, e delle madri qualunque sia il loro stato civile. La legge potrà consentire l'accertamento della paternità.
3. I padri devono prestare ogni assistenza ai figli avuti dentro o fuori del matrimonio nella minore età e nelle altre ipotesi previste dalla legge.
4. L'infanzia godrà della protezione prevista negli accordi internazionali che ne tutelano i diritti.

Articolo 40.

1. I pubblici poteri promuoveranno le condizioni favorevoli per il progresso sociale ed economico e per una più equa distribuzione del reddito regionale e personale, nel quadro di una politica di stabilità economica. In modo speciale realizzeranno una politica orientata al pieno impiego.
2. Inoltre, i pubblici poteri svilupperanno una politica che garantisca la formazione e il riadattamento professionale; veglieranno per la sicurezza e l'igiene nel lavoro e garantiranno il riposo necessario, mediante la limitazione della giornata lavorativa, le ferie periodiche retribuite e la promozione di centri adeguati.

Articolo 41.

I pubblici poteri manterranno un regime pubblico di Previdenze Sociali per tutti i cittadini, che garantisca l'assistenza e prestazioni sociali sufficienti di fronte a situazioni di bisogno, specialmente in caso di disoccupazione. L'assistenza e le prestazioni complementari saranno libere.

Articolo 42.

Lo Stato veglierà in special modo per la salvaguardia dei diritti economici e sociali dei lavoratori spagnoli all'estero e orienterà la sua politica al fine di assicurarne il rientro.

Articolo 43.

1. Si riconosce il diritto alla salvaguardia della salute.
2. Compete ai pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica con le modalità preventive e le prestazioni e servizi necessari. Al riguardo, la legge stabilirà i diritti e i doveri di tutti.
3. I pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero.

Articolo 44.

1. I pubblici poteri promuoveranno e tuteleranno l'accesso alla cultura, alla quale tutti hanno diritto.
2. I pubblici poteri promuoveranno la scienza e la ricerca scientifica e tecnica a vantaggio dell'interesse generale.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 45.

1. Tutti hanno il diritto di utilizzare un ambiente idoneo allo sviluppo della persona, così come il dovere di conservarlo.

2. I poteri pubblici veglieranno sulla utilizzazione razionale di tutte le risorse naturali al fine di proteggere e migliorare la qualità di vita, difendere e ripristinare l'ambiente, appoggiandosi all'indispensabile solidarietà collettiva.

3. Per coloro che violino quanto disposto nel comma precedente, nei termini fissati dalla legge si stabiliranno sanzioni penali o, se del caso, amministrative, così come l'obbligo di riparare il danno causato.

Articolo 46.

I poteri pubblici garantiranno la conservazione e promuoveranno l'arricchimento del patrimonio storico, culturale e artistico dei popoli della Spagna e dei beni che lo integrano, quale che sia il suo regime giuridico e la sua titolarità. La legge penale sanzionerà gli attentati contro questo patrimonio.

Articolo 47.

Tutti gli spagnoli hanno il diritto di godere di una abitazione degna e adeguata. I pubblici poteri promuoveranno le condizioni necessarie e stabiliranno norme idonee per rendere effettivo questo diritto, regolando l'utilizzazione del suolo conformemente all'interesse generale per impedire la speculazione.

La comunità parteciperà della valorizzazione prodotta dagli interventi urbanistici degli enti pubblici.

Articolo 48.

I pubblici poteri promuoveranno le condizioni per la partecipazione libera ed efficace della gioventù nello sviluppo politico, sociale ed economico e culturale.

Articolo 49.

1. Le persone con disabilità esercitano i diritti previsti nel presente Titolo in condizioni di libertà e uguaglianza reali ed effettive. Per legge si regolerà la protezione speciale necessaria all'esercizio di tali diritti.

2. I pubblici poteri promuoveranno politiche atte a garantire la piena autonomia personale e l'inclusione sociale dei disabili in ambienti universalmente accessibili. Inoltre, favoriranno la partecipazione delle loro organizzazioni, nei termini stabiliti dalla legge. Un'attenzione particolare dovrà essere rivolta alle esigenze specifiche delle donne e dei minori con disabilità.

Articolo 50.

I pubblici poteri garantiranno mediante pensioni adeguate e periodicamente aggiornate l'autonomia economica ai cittadini durante la terza età. Inoltre, indipendentemente dagli obblighi familiari, promuoveranno il loro benessere mediante un sistema di servizi sociali che attenderanno ai loro problemi specifici di salute, abitazione, cultura e tempo libero.

Articolo 51.

1. I pubblici poteri garantiranno la difesa dei consumatori e degli utenti proteggendo, mediante procedimenti efficaci, la sicurezza, la salute e i legittimi interessi economici degli stessi.

2. I pubblici poteri promuoveranno l'informazione e l'educazione dei consumatori e degli utenti, svilupperanno le loro organizzazioni e le consulteranno nelle questioni che possono interessare i medesimi nei termini che la legge stabilisce.

3. Nel quadro di quanto disposto nei comma precedenti la legge regolerà il commercio interno e il regime di autorizzazione dei prodotti commerciali.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 52.

La legge regolerà le organizzazioni professionali che contribuiscano alla difesa degli interessi economici che le siano propri. La loro struttura interna e il loro funzionamento dovranno essere democratici.

CAPITOLO QUARTO

Delle garanzie delle libertà dei diritti fondamentali

Articolo 53.

1. I diritti e libertà riconosciuti nel capitolo secondo del presente Titolo vincolano tutti i pubblici poteri. Soltanto mediante una legge, che in ogni caso dovrà rispettare il loro contenuto essenziale, si potrà regolare l'esercizio di tali diritti e libertà, che saranno tutelati in accordo con quanto previsto nell'articolo 161,1 a).

2. Qualsiasi cittadino potrà ottenere la tutela delle libertà e diritti riconosciuti nell'articolo 14 e nella Sezione prima del Capitolo secondo, di fronte ai Tribunali ordinari attraverso un procedimento basato sui principi di preferenza e sommarietà e, se del caso, attraverso il ricorso di amparo di fronte al Tribunale Costituzionale. Quest'ultimo ricorso sarà utilizzabile nel caso dell'obiezione di coscienza riconosciuta nell'articolo 30.

3. Il riconoscimento, il rispetto e la protezione dei principi riconosciuti nel Capitolo terzo ispireranno la legislazione positiva, la pratica giudiziaria e l'azione dei pubblici poteri. Potranno essere adottati di fronte alla giurisdizione ordinaria soltanto in conformità con quanto disposto dalle leggi che li attuano.

Articolo 54.

Una legge organica regolerà l'istituzione del Difensore del Popolo, come alto commissario delle Cortes Generali, designato da queste alla difesa dei diritti compresi in questo titolo, al cui fine potrà controllare l'attività dell'Amministrazione, riferendo quindi alle Cortes Generali.

CAPITOLO QUINTO

Della sospensione dei diritti e delle libertà

Articolo 55.

1. I diritti riconosciuti negli articoli 17, 18 comma 2 e 3, articoli 19, 20 comma 1 a) e d) e 5, articoli 21, 28 comma 2 e articolo 37 comma 2, potranno essere sospesi quando venga accordata la dichiarazione dello stato di eccezione o di assedio nei termini previsti nella Costituzione. Resta escluso da quanto sopra stabilito il comma 3 dell'articolo 17 nel caso di dichiarazione dello stato di eccezione.

2. Una legge organica potrà determinare la forma e i casi in cui, per singoli procedimenti e con il necessario intervento giudiziario e con l'adeguato controllo parlamentare, i diritti riconosciuti negli articoli 17 comma 2, e 18 comma 2 e 3, possono essere sospesi nei confronti di determinate persone, in relazione ad investigazioni connesse all'azione di bande armate o di elementi terroristi.

L'utilizzazione ingiustificata o abusiva delle facoltà riconosciute in detta legge organica produrrà responsabilità penali, in quanto violazione dei diritti e libertà riconosciuti dalle leggi.

TITOLO II

Della Corona

Articolo 56.

1. Il Re è Capo dello Stato, simbolo della sua unità e continuità, arbitra e modera il funzionamento regolare delle istituzioni, assume la più alta rappresentanza dello Stato

§ 2 La Costituzione Spagnola

spagnolo nelle relazioni internazionali, specialmente con le nazioni della sua comunità storica, ed esercita le funzioni espressamente conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi.

2. Il suo titolo è quello di Re di Spagna, potendo usare anche gli altri che competano alla Corona.

3. La persona del Re è inviolabile e non è soggetta a responsabilità. I suoi atti saranno sempre controfirmati nella forma stabilita nell'articolo 64, essendo privi di validità senza detta controfirma, salvo quanto disposto nell'articolo 65, 2.

Articolo 57.

1. La Corona di Spagna è ereditaria a favore dei successori di S.M. Don Juan Carlos I di Borbone, legittimo erede della dinastia storica. La successione al trono seguirà l'ordine regolare della primogenitura e rappresentanza, essendo sempre preferita la linea anteriore alle posteriori; nella stessa linea il grado più prossimo al più remoto; nello stesso grado, il maschio alla femmina e nello stesso sesso la persona più anziana a quella più giovane.

2. Il Principe ereditario, dalla sua nascita o dal momento in cui maturi il fatto che origini la sua nomina, avrà il titolo di Principe delle Asturie e gli ulteriori titoli tradizionalmente spettanti al successore della Corona di Spagna.

3. Estinte tutte le linee chiamate alla successione per diritto, le Cortes Generali provvederanno alla successione alla Corona nella forma che più convenga agli interessi della Spagna.

4. Le persone che avendo diritto alla successione al trono contrarranno matrimonio contro l'espressa proibizione del Re o delle Cortes Generali saranno escluse dalla successione alla Corona per sé e per i loro discendenti.

5. Le abdicazioni e rinunce e qualsiasi dubbio di fatto o di diritto che intervenga nell'ordine della successione alla Corona saranno risolte da una legge organica.

Articolo 58.

La Regina consorte o il consorte della Regina non potranno assumere funzioni costituzionali, salvo quanto disposto per la Reggenza.

Articolo 59.

1. Qualora il Re fosse minore di età, il padre o la madre del Re o, in loro assenza, il parente maggiore di età più prossimo nella successione alla Corona, secondo l'ordine stabilito nella Costituzione, eserciterà immediatamente la Reggenza e la continuerà durante il tempo della minore età del Re.

2. Se il Re fosse inabile all'esercizio della sua autorità e l'impossibilità fosse riconosciuta dalle Cortes Generali, eserciterà immediatamente la Reggenza il Principe ereditario della Corona, se di maggiore età. Se non lo fosse, si procederà nella maniera prevista nel comma precedente, fino a che il Principe ereditario arrivi alla maggiore età.

3. Se non ci fosse nessuna persona cui spetti la Reggenza, questa sarà nominata dalle Cortes Generali e sarà composta di una, tre o cinque persone.

4. Per esercitare la Reggenza bisogna essere spagnoli e di maggiore età.

5. La Reggenza si eserciterà per mandato costituzionale e sempre in nome del Re.

Articolo 60.

1. Sarà tutore del Re nella minore età la persona che il defunto Re abbia nominato nel suo testamento, sempre che sia di maggiore età e spagnolo di nascita; ove non l'abbia nominato, il tutore sarà il padre o la madre, finché permanga lo stato di vedovanza. In loro mancanza, le Cortes Generali lo nomineranno, però non potranno cumularsi le cariche di Reggente e di tutore se non nel padre, madre o ascendenti diretti del Re.

2. L'esercizio della tutela è anche incompatibile con qualsiasi incarico o rappresentanza politica.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 61.

1. Il Re, al momento di essere proclamato di fronte alle Cortes Generali, presterà giuramento di svolgere fedelmente le sue funzioni, osservare e far osservare la Costituzione e le leggi e rispettare i diritti dei cittadini e delle Comunità Autonome.

2. Il Principe ereditario, al raggiungimento della maggiore età, e il Reggente o i Reggenti al momento di assumere le loro funzioni presteranno lo stesso giuramento, così come quello di fedeltà al Re.

Articolo 62.

Spetta al Re:

- a) sanzionare e promulgare le leggi;
- b) convocare e sciogliere le Cortes Generali e indire le elezioni secondo le modalità previste dalla Costituzione;
- c) indire il referendum nei casi previsti dalla Costituzione;
- d) proporre il candidato a Presidente del Governo e, se del caso, nominarlo, così come porre fine alle sue funzioni secondo le modalità previste dalla Costituzione;
- e) nominare e allontanare i membri del Governo su proposta del loro Presidente;
- f) emanare i decreti deliberati dal Consiglio dei Ministri, nominare agli impieghi civili e militari e concedere onorificenze e titoli conformemente alle leggi;
- g) essere informato degli affari dello Stato e presiedere, a questi effetti, le sessioni del Consiglio dei Ministri quando lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente del Governo;
- h) il comando supremo delle Forze Armate;
- i) esercitare il diritto di grazia conformemente alla legge, che non potrà autorizzare indulti generali;
- j) l'alto patronato delle Reali Accademie.

Articolo 63.

1. Il Re accredita gli ambasciatori e gli altri rappresentanti diplomatici. I rappresentanti stranieri in Spagna sono accreditati di fronte a Lui.

2. Spetta al Re manifestare il consenso dello Stato per stringere obblighi internazionali attraverso trattati in conformità alla Costituzione e alle leggi.

3. Spetta al Re, previa autorizzazione delle Cortes Generali, dichiarare la guerra e fare la pace.

Articolo 64.

1. Gli atti del Re saranno controfirmati dal Presidente del Governo e, se del caso, dai Ministri competenti. La proposta e la nomina del Presidente del Governo e lo scioglimento previsto nell'articolo 95 saranno controfirmati dal Presidente del Congresso.

2. Degli atti del Re saranno responsabili i soggetti che li controfirmeranno.

Articolo 65.

1. Il Re riceve dal Bilancio Generale dello Stato una globale assegnazione per il mantenimento della sua Famiglia e Casa e ne dispone liberamente.

2. Il Re nomina e revoca liberamente i membri civili e militari della sua Casa.

§ 2 La Costituzione Spagnola

TITOLO III

Delle Cortes Generali

CAPITOLO PRIMO

Delle Camere

Articolo 66.

1. Le Cortes Generali rappresentano il popolo spagnolo e sono formate dal Congresso dei Deputati e dal Senato.

2. Le Cortes Generali esercitano la potestà legislativa dello Stato, approvano il suo Bilancio, controllano l'azione del Governo e hanno le ulteriori competenze che attribuisce loro la Costituzione.

3. Le Cortes Generali sono inviolabili.

Articolo 67.

1. Nessuno potrà essere membro delle due Camere simultaneamente nè cumulare la nomina in un'Assemblea di Comunità Autonoma e quella di Deputato del Congresso.

2. I membri delle Cortes Generali non saranno vincolati da mandato imperativo.

3. Le riunioni di parlamentari che si svolgano senza la convocazione regolamentare non vincoleranno le Camere e non potranno esercitare le loro funzioni nè pretendere i loro privilegi.

Articolo 68.

1. Il Congresso si compone di un minimo di 300 a un massimo di 400 Deputati eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto secondo le condizioni stabilite dalla legge.

2. La circoscrizione elettorale è la provincia. Le popolazioni di Ceuta e Melilla saranno rappresentate ciascuna da un Deputato. La legge distribuirà il numero totale di Deputati assegnando una rappresentanza minima iniziale a ciascuna circoscrizione e distribuendo i rimanenti in proporzione alla popolazione.

3. L'elezione si verificherà in ogni circoscrizione attenendosi a criteri di rappresentanza proporzionale.

4. Il Congresso è eletto per quattro anni. Il mandato dei Deputati termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.

5. Sono elettori e eleggibili tutti gli spagnoli che abbiano la piena disposizione dei loro diritti politici.

La legge riconoscerà e lo Stato faciliterà l'esercizio del diritto di voto per gli spagnoli che si trovino fuori del territorio spagnolo.

6. Le elezioni avranno luogo fra i trenta giorni e i sessanta giorni dal termine del mandato. Il Congresso eletto dovrà essere convocato entro i venticinque giorni successivi allo svolgimento delle elezioni.

Articolo 69.

1. Il Senato è la Camera di rappresentanza territoriale.

2. In ogni provincia si eleggeranno quattro Senatori a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto per i votanti di ciascuna di esse, secondo le modalità indicate da una legge organica.

3. Nelle province insulari, ogni isola o loro raggruppamento, con Capitolo o Consiglio Insulare, costituirà una circoscrizione agli effetti dell'elezione dei Senatori, spettandone tre a ciascuna delle isole maggiori —Gran Canaria, Maiorca e Tenerife— e uno per ognuna delle seguenti isole o raggruppamenti: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.

4. Le popolazioni di Ceuta e Melilla eleggeranno ciascuna due Senatori.

§ 2 La Costituzione Spagnola

5. Le Comunità Autonome designeranno inoltre un Senatore e uno in più per ogni milione di abitanti del rispettivo territorio. La designazione spetterà all'Assemblea legislativa o, in sua mancanza, all' Organo Collegiale Superiore della Comunità Autonoma, conformemente a quello che stabiliranno gli Statuti, che assicureranno in ogni caso l'adeguata rappresentanza proporzionale.

6. Il Senato è eletto per quattro anni. Il mandato dei Senatori termina quattro anni dopo la loro elezione o il giorno dello scioglimento della Camera.

Articolo 70.

1. La legge elettorale determinerà le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei Deputati e Senatori che riguaderanno in ogni caso:

- a) i componenti del Tribunale Costituzionale;
- b) le alte cariche dell'Amministrazione dello Stato determinate dalla legge con l'eccezione dei membri del Governo;
- c) il Difensore del Popolo;
- d) il magistrati, i giudici, e i rappresentanti della Pubblica Accusa in servizio;
- e) i militari in servizio effettivo e i membri delle Forze e Corpi di Sicurezza e Polizia in servizio;
- f) i membri delle Giunte elettorali.

2. La validità dei titoli e credenziali dei membri di entrambe le Camere saranno sottoposte al controllo giudiziario secondo le condizioni stabilite dalle leggi elettorali.

Articolo 71.

1. I Diputati e Senatori godranno dell'inviolabilità per le opinioni manifestate nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Durante il periodo del loro mandato i Diputati e Senatori godranno altresì dell'immunità e potranno solamente essere detenuti in caso di flagrante reato. Non potranno essere incriminati nè processati se non previa autorizzazione delle rispettive Camere.

3. Nei processi contro Deputati e Senatori sarà competente la Sezione Penale del Tribunale Supremo.

4. I Diputati e Senatori percepiranno una indennità che sarà fissata dalle rispettive Camere.

Articolo 72.

1. Le Camere stabiliscono i propri Regolamenti, approvano in modo autonomo i loro bilanci e, di comune accordo, regolano lo Statuto del Personale delle Cortes Generali. I Regolamenti e le loro modifiche saranno sottoposti a votazione finale complessiva, che richiederà la maggioranza assoluta.

2. Le Camere eleggono i loro rispettivi Presidenti e gli altri membri degli Uffici di Presidenza. Le Sessioni congiunte saranno presiedute dal Presidente del Congresso e saranno disciplinate da un Regolamento delle Cortes Generali approvato con maggioranza assoluta da ciascuna Camera.

3. I Presidenti delle Camere esercitano in nome delle stesse tutti i poteri amministrativi e i compiti di polizia all'interno delle loro rispettive sedi.

Articolo 73.

1. Le Camere si riuniranno annualmente in due periodi ordinari di sessioni: il primo da settembre a dicembre; e il secondo da febbraio a giugno.

2. Le Camere potranno riunirsi in sessioni straordinarie a richiesta del Governo, della Deputazione Permanente o della maggioranza assoluta dei membri di qualunque Camera. Le sessioni straordinarie dovranno convocarsi su un'ordine del giorno determinato e saranno chiuse una volta che questo sia stato esaurito.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 74.

1. Le Camere si riuniranno in sessione congiunta per esercitare le competenze non legislative che il Titolo secondo attribuisce espressamente alle Cortes Generali.

2. Le decisioni delle Cortes Generali previste negli articoli 94, 1, 145, 2, e 158, 2, saranno adottate a maggioranza di ognuna delle Camere. Nel primo caso il procedimento sarà iniziato dal Congresso e negli altri due dal Senato. In entrambi i casi, se non ci fosse accordo fra Senato e Congresso, si tenterà di raggiungerlo tramite una Commissione mista composta in ugual numero da Deputati e Senatori. La Commissione presenterà un testo che sarà votato da entrambe le Camere. Se questo non fosse approvato nella forma stabilita, deciderà il Congresso a maggioranza assoluta.

Articolo 75.

1. Le Camere funzioneranno in Assemblea e per Commissioni.

2. Le Camere potranno delegare alle Commissioni legislative permanenti l'approvazione dei progetti o proposte di legge. L'assemblea potrà, ciò nonostante, avocare in qualsiasi momento il dibattito e la votazione di qualsiasi progetto o proposta di legge che sia stato oggetto di questa delegazione.

3. Rimangono eccettuati da quanto disposto nel comma precedente la riforma costituzionale, le questioni internazionali, le leggi organiche e di principio e i Bilanci Generali dello Stato.

Articolo 76.

1. Il Congresso e il Senato e, se del caso, entrambe le Camere congiunte, potranno nominare Commissioni d'inchiesta su qualsiasi argomento di pubblico interesse. Le loro conclusioni non saranno vincolanti per i Tribunali, nè influenzeranno le decisioni giudiziarie senza impedire che il risultato dell'inchiesta sia comunicato al Pubblico Ministero per l'esercizio, ove necessario, delle azioni opportune.

2. Sarà obbligatorio comparire a richiesta delle Camere. La legge regolerà le sanzioni che possono applicarsi per l'inadempimento di questo obbligo.

Articolo 77.

1. Le Camere possono ricevere petizioni individuali e collettive, sempre per iscritto, restando proibita la presentazione diretta con manifestazioni pubbliche.

2. Le Camere possono trasmettere al Governo le petizioni che ricevono. Il Governo è obbligato ad esprimersi sul loro contenuto, ove le Camere lo esigano.

Articolo 78.

1. In ogni Camera si avrà una Deputazione Permanente composta da un minimo di ventun membri, che rappresenteranno i gruppi parlamentari, in proporzione all'importanza numerica.

2. Le Deputazioni Permanenti saranno presiedute dal Presidente delle rispettive Camere e avranno come funzioni quelle previste dall'articolo 73, quelle di assumere i compiti che spettano alle Camere, conformemente agli articoli 86 e 116, in caso che queste siano state sciolte o abbiano cessato il loro mandato, e quella di vigilare sui poteri delle Camere quando queste non sono riunite.

3. Terminato il mandato o in caso di scioglimento, le Deputazioni Permanenti continueranno a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle nuove Cortes Generali.

4. Riunita la Camera corrispondente, la Deputazione Permanente renderà conto dei compiti svolti e delle proprie decisioni.

Articolo 79.

1. Per adottare delibere le Camere devono essere riunite regolarmente e con la presenza della maggioranza dei loro membri.

2. Dette delibere per essere valide dovranno essere approvate dalla maggioranza dei membri presenti, senza pregiudizio delle maggioranze speciali che stabiliscono la

§ 2 La Costituzione Spagnola

Costituzione o le leggi organiche e di quelle che i Regolamenti delle Camere stabiliscono per l'elezione delle persone.

3. Il voto dei Senatori e Deputati è personale e indelegabile.

Articolo 80.

Le sessioni plenarie delle Camere saranno pubbliche, salvo decisione contraria di ciascuna Camera, adottata a maggioranza assoluta e conformemente al Regolamento.

CAPITOLO SECONDO

Della elaborazione delle leggi

Articolo 81.

1. Sono leggi organiche quelle relative all'attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche, quelle che approvano gli Statuti di autonomia e il regime elettorale generale e le altre previste dalla Costituzione.

2. L'approvazione, modifica o deroga delle leggi organiche comporterà la maggioranza assoluta del Congresso con una votazione finale del progetto nel suo complesso.

Articolo 82.

1. Le Cortes Generali potranno delegare al Governo la potestà di dettare norme con grado di legge su determinate materie non incluse nel precedente articolo.

2. La delegazione legislativa dovrà essere concessa mediante una legge di principi quando il suo oggetto sia la formazione di nuovi testi redatti in articoli o tramite una legge ordinaria quando si tratti di rifondere vari testi legali in un testo unico.

3. La delegazione legislativa dovrà concedersi al Governo in forma espressa, per materia definita e con determinazione del termine per il suo esercizio. La delegazione si esaurisce attraverso l'uso fattone dal Governo tramite la pubblicazione delle relative norme. Non potrà intendersi concessa in modo implicito o per tempo indeterminato. Neppure potrà essere permessa la subdelegazione ad autorità distinte dal Governo.

4. Le leggi di principi delimitano con precisione l'oggetto e gli obiettivi della delegazione legislativa e i principi e criteri da seguirsi nel suo esercizio.

5. L'autorizzazione per rifondere testi legali determinerà l'ambito normativo a cui si riferisce il contenuto della delegazione, specificando se si limita alla mera formulazione di un testo unico o se comprende il riordinamento, la chiarificazione e l'armonizzazione dei testi legali che debbono essere riformulati.

6. Senza pregiudizio della competenza propria dei Tribunali, le leggi di delega potranno in ogni caso stabilire formule addizionali di controllo.

Articolo 83.

Le leggi di principi non potranno in nessun caso:

- a) autorizzare la modifica delle stesse leggi di principi;
- b) abilitare ad adottare norme con carattere retroattivo.

Articolo 84.

Qualora una proposta di legge o un emendamento fossero contrari a una delegazione legislativa in vigore, il Governo ha la facoltà di opporsi al loro inoltro. In tal caso potrà presentarsi una proposta di legge per la deroga totale o parziale della legge di delegazione.

Articolo 85.

Le disposizioni del Governo che contengono legislazione delegata riceveranno la denominazione di Decreti Legislativi.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 86.

1. In caso di straordinaria e urgente necessità, il Governo potrà dettare disposizioni legislative provvisorie che prenderanno la forma di Decreti-Legge e che non potranno modificare l'ordinamento delle istituzioni basilari dello Stato, i diritti, i doveri e libertà dei cittadini regolati nel Titolo primo, il regime delle Comunità Autonome, né il diritto elettorale generale.

2. I Decreti-Legge dovranno essere immediatamente sottoposti a esame e votazione dall'Assemblea del Congresso dei Deputati, convocata a tal fine ove non fosse già riunita, nel termine di trenta giorni successivi alla loro promulgazione. Il Congresso dovrà pronunciarsi espressamente entro detto termine sulla convalida o rifiuto, per cui il Regolamento stabilirà un procedimento speciale e di urgenza.

3. Durante il termine stabilito nel comma precedente le Cortes potranno inoltrarli come progetti di legge con procedura d'urgenza.

Articolo 87.

1. L'iniziativa legislativa spetta al Governo, al Congresso e al Senato conformemente alla Costituzione e ai Regolamenti delle Camere.

2. Le Assemblee delle Comunità Autonome potranno sollecitare al Governo l'adozione di un progetto di legge o rimettere all'Ufficio di Presidenza del Congresso una proposta di legge, formando una delegazione, di al massimo tre membri dell'Assemblea, incaricata della sua perorazione di fronte alla Camera.

3. Una legge organica regolerà le forme di esercizio e i requisiti dell'iniziativa popolare per la presentazione di proposte di legge. In ogni caso si esigeranno non meno di 500.000 firme autenticate. Detta iniziativa non spetterà nelle materie proprie della legge organica, tributaria o di carattere internazionale, né in quella relativa alla prerogativa di grazia.

Articolo 88.

I progetti di legge saranno approvati dal Consiglio dei Ministri che li sottoporrà al Congresso, accompagnati da una indicazione dei motivi e dei precedenti necessari per pronunciarsi su di essi.

Articolo 89.

1. Il procedimento delle proposte di legge sarà disciplinato tramite i Regolamenti delle Camere, senza che la priorità riconosciuta ai progetti di legge impedisca l'esercizio dell'iniziativa legislativa nei termini regolati dall'articolo 87.

2. Le proposte di legge che, conformemente all'articolo 87, vengano prese in considerazione dal Senato saranno inviate al Congresso per essere considerate in esso sotto forma di proposte.

Articolo 90.

1. Quando il Congresso dei Deputati abbia approvato un progetto di legge ordinaria o organica, il suo Presidente informerà immediatamente il Presidente del Senato, il quale lo sottoporrà a delibera di quest'ultimo.

2. Il Senato, nel termine di due mesi, a far tempo dal giorno in cui ha ricevuto il testo, può, mediante messaggio motivato, opporre il suo veto o apportare emendamenti allo stesso. Il veto dovrà essere approvato a maggioranza assoluta. Il progetto non potrà essere sottoposto al Re per sanzione fino a che il Congresso ratifichi il testo a maggioranza assoluta, in caso di veto, o a maggioranza semplice, una volta trascorsi due mesi dalla interposizione dello stesso, o si pronunci sugli emendamenti, accettandoli o no a maggioranza semplice.

3. Il termine di due mesi di cui il Senato dispone per vietare o emendare il progetto si ridurrà a venti giorni liberi nel caso di progetti dichiarati urgenti dal Governo o dal Congresso dei Deputati.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 91.

Il Re sanzionerà nel termine di quindici giorni le leggi approvate dalle Cortes Generali e le promulgherà ordinando la loro immediata pubblicazione.

Articolo 92.

1. Le decisioni politiche di speciale importanza potranno essere sottoposte a referendum consultivo di tutti i cittadini.

2. Il referendum sarà indetto dal Re, su proposta del Presidente del Governo, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati.

3. Una legge organica regolerà le condizioni e il procedimento dei diversi tipi di referendum previsti in questa Costituzione.

CAPITOLO TERZO

Dei trattati internazionali

Articolo 93.

Mediante legge organica si potrà autorizzare la stipulazione di trattati con cui si attribuisca a un'organizzazione o istituzione internazionale l'esercizio di competenze derivate dalla Costituzione. Spetta alle Cortes Generali o al Governo, a seconda dei casi, garantire l'attuazione di questi trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi internazionali o supernazionali titolari della cessione.

Articolo 94.

1. La prestazione del consenso dello Stato per contrarre obblighi tramite trattati o accordi richiederà la previa autorizzazione delle Cortes Generali nei seguenti casi:

- a) trattati di carattere politico;
- b) trattati o accordi di carattere militare;
- c) trattati o accordi che riguardino l'integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri fondamentali stabiliti nel Titolo primo;
- d) trattati o accordi che implicino obblighi finanziari per le finanze pubbliche;
- e) trattati o accordi che presuppongano modifiche o abrogazione di leggi o esigano misure legislative per la loro esecuzione.

2. Il Congresso e il Senato saranno immediatamente informati delle conclusioni dei restanti trattati o accordi.

Articolo 95.

1. La stipulazione di un trattato internazionale che contenga clausole contrarie alla Costituzione comporterà la previa revisione costituzionale.

2. Il Governo o una delle due Camere possono richiedere al Tribunale Costituzionale che dichiari se esiste o no tale contrasto.

Articolo 96.

1. I trattati internazionali validamente stipulati, una volta pubblicati ufficialmente in Spagna, formeranno parte dell'ordinamento interno. Le loro disposizioni potranno essere derogate, modificate o sospese soltanto nella forma prevista negli stessi trattati o conformemente alle norme generali del diritto internazionale.

2. Per la denuncia dei trattati o accordi internazionali si utilizzerà lo stesso procedimento previsto per la loro approvazione nell'articolo 94.

§ 2 La Costituzione Spagnola

TITOLO IV

Del Governo e della Amministrazione

Articolo 97.

Il Governo dirige la politica nazionale ed estera, l'Amministrazione civile e militare e la difesa dello Stato. Esercita la funzione esecutiva e la potestà regolamentare conformemente alla Costituzione e alle leggi.

Articolo 98.

1. Il Governo è composto dal Presidente, se del caso dai Vice Presidenti, dai Ministri e dagli ulteriori membri che stabilisca la legge.

2. Il Presidente dirige l'azione del Governo e coordina le funzioni degli altri membri dello stesso, senza pregiudizio della competenza e responsabilità diretta di questi ultimi nella loro attività di amministrazione.

3. I membri del Governo non potranno esercitare altre funzioni rappresentative che quelle connesse al mandato parlamentare, né qualsiasi altra funzione pubblica che non derivi dal loro incarico né qualsiasi attività professionale o commerciale.

4. La legge regolerà lo statuto e le incompatibilità dei membri del Governo.

Articolo 99.

1. Dopo ogni rinnovo del Congresso dei Deputati e nelle altre circostanze costituzionali in cui ciò si riveli necessario, il Re, previa consultazione dei rappresentanti designati dai gruppi politici presenti in parlamento e attraverso il Presidente del Congresso, proporrà un candidato alla Presidenza del Governo.

2. Il candidato proposto secondo quanto previsto nel comma precedente, esporrà di fronte al Congresso dei Deputati il programma politico del Governo che intende formare e solleciterà la fiducia della Camera.

3. Ove il Congresso dei Deputati, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, conceda la sua fiducia a detto candidato, il Re lo nominerà Presidente. Ove non si raggiunga detta maggioranza, si sottoporrà la stessa proposta a nuova votazione quarantotto ore dopo la precedente, e la fiducia s'intenderà concessa ove si ottenga la maggioranza semplice.

4. Se effettuate le citate votazioni non si ottiene la fiducia per l'investitura, si presenteranno successive proposte nella forma prevista nei comma precedenti.

5. Se trascorso il termine di due mesi, a partire dalla prima votazione sulla fiducia, nessun candidato avesse ottenuto la fiducia del Congresso, il Re scioglierà entrambe le Camere e indirà nuove elezioni con la controfirma del Presidente del Congresso.

Articolo 100.

Gli altri membri del Governo saranno nominati e revocati dal Re, su proposta del suo Presidente.

Articolo 101.

1. Il Governo è dimissionario in conseguenza delle elezioni generali, nei casi di perdita della fiducia parlamentare previsti dalla Costituzione o per dimissioni o decesso del suo Presidente.

2. Il Governo dimissionario resterà in carica fino alla immissione nelle funzioni del nuovo Governo.

Articolo 102.

1. La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, se del caso, di fronte alla Sezione Penale del Tribunale Supremo.

2. L'accusa per alto tradimento o per qualsiasi reato contro la sicurezza dello Stato commesso nell'esercizio delle funzioni, potrà essere promossa solamente per iniziativa della

§ 2 La Costituzione Spagnola

quarta parte dei membri del Congresso e con voto favorevole della maggioranza assoluta dello stesso.

3. La prerogativa reale di grazia non sarà applicabile a nessuno dei casi di cui al presente articolo.

Articolo 103.

1. La Pubblica Amministrazione serve con obiettività gli interessi generali e agisce in conformità ai principi di efficienza, gerarchia, decentramento, deconcentrazione e coordinazione, con piena sottomissione alla legge e al Diritto.

2. Gli organi delle Amministrazioni dello Stato sono costituiti, governati e coordinati conformemente alla legge.

3. La legge disciplinerà lo statuto dei funzionari pubblici, l'accesso alla funzione pubblica conformemente ai principi di merito e capacità, le particolarità dell'esercizio del loro diritto a costituire sindacati, il sistema delle incompatibilità e le garanzie d'imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 104.

1. Le Forze e i Corpi di sicurezza, sotto la direzione del Governo, avranno come missione la protezione del libero esercizio dei diritti e libertà e la garanzia della sicurezza dei cittadini.

2. Una legge organica determinerà le funzioni, i principi basilari di azione e gli statuti delle Forze e Corpi di sicurezza.

Articolo 105.

La legge disciplinerà:

a) la presenza dei cittadini, direttamente o attraverso le organizzazioni e associazioni riconosciute dalla legge, nel procedimento di elaborazione delle disposizioni amministrative che li riguardano;

b) l'accesso dei cittadini agli archivi e registri amministrativi, eccezion fatta per ciò che riguarda la sicurezza e difesa dello Stato, l'accertamento dei reati e l'intimità delle persone;

c) il procedimento attraverso cui devono adottarsi gli atti amministrativi assicurando, quando necessario, la partecipazione dell'interessato.

Articolo 106.

1. I Tribunali controllano la potestà regolamentare e la legalità dell'azione amministrativa, così come la corrispondenza di questa ai fini che la giustificano.

2. Nei termini stabiliti dalla legge, i privati avranno diritto a essere indennizzati per qualunque lesione nei loro beni e diritti, salvo nei casi di forza maggiore, sempre che la lesione sia conseguenza del funzionamento dei pubblici esercizi.

Articolo 107.

Il Consiglio di Stato è il supremo organo consultivo del Governo. Una legge organica regolerà la sua composizione e competenza.

TITOLO V

Delle relazioni tra il Governo e le Cortes Generali

Articolo 108.

Il Governo risponde solidalmente dalla sua gestione politica di fronte al Congresso dei Deputati.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 109.

Le Camere e le loro Commissioni, attraverso i rispettivi Presidenti, potranno ottenere l'informazione e l'assistenza di cui necessitano dal Governo e dai suoi Dipartimenti e da qualsiasi autorità dello Stato e delle Comunità Autonome.

Articolo 110.

1. Le Camere e le loro Commissioni possono pretendere la presenza dei membri del Governo.

2. I membri del Governo hanno accesso alle sedute delle Camere e delle loro Commissioni e facoltà di farsi ascoltare da queste e potranno richiedere che funzionari dei rispettivi Dipartimenti vengano ascoltati dalle stesse.

Articolo 111.

1. Il Governo e ciascuno dei suoi membri sono soggetti alle interpellanze e interrogazioni formulate nelle Camere. Per questo tipo di dibattito i Regolamenti stabiliranno un tempo minimo settimanale.

2. Ogni interpellanza potrà dar luogo alla presentazione di una mozione in cui la Camera manifesti la sua posizione.

Articolo 112.

Il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può porre di fronte al Congresso dei Deputati la questione di fiducia sul suo programma o su una dichiarazione di politica generale. La fiducia si considererà accordata quando voti a favore la maggioranza semplice dei Deputati.

Articolo 113.

1. Il Congresso dei Deputati può impegnare la responsabilità politica del Governo mediante l'adozione a maggioranza assoluta della mozione di censura.

2. La mozione di censura dovrà essere proposta almeno dalla decima parte dei Deputati e dovrà indicare un candidato alla Presidenza del Governo.

3. La mozione di censura non potrà essere votata fino a che non trascorran cinque giorni dalla sua presentazione. Nei due primi giorni di tale periodo si potranno presentare mozioni alternative.

4. Se la mozione di censura non fosse approvata dal Congresso, i suoi firmatari non potranno presentarne un'altra durante lo stesso periodo di sessione.

Articolo 114.

1. Se il Congresso nega la sua fiducia al Governo, questi presenterà le sue dimissioni al Re, procedendosi immediatamente alla designazione del Presidente del Governo, conformemente all'articolo 99.

2. Se il Congresso approva una mozione di censura, il Governo presenterà le sue dimissioni al Re e il candidato incluso in quella mozione s'intenderà investito della fiducia della Camera agli effetti previsti nell'articolo 99. Il Re lo nominerà Presidente del Governo.

Articolo 115.

1. Il Presidente del Governo, previa delibera del Consiglio dei Ministri e sotto la sua esclusiva responsabilità, potrà proporre lo scioglimento del Congresso, del Senato e delle Cortes Generali, che sarà decretato dal Re. Il decreto di scioglimento fisserà la data delle elezioni.

2. Non potrà presentarsi proposta di scioglimento quando sia già stata depositata una mozione di censura.

3. Non si procederà a nuovo scioglimento prima che trascorra un anno dall'antecedente, salvo quanto disposto nell'articolo 99, comma 5.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 116.

1. Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e di assedio, le competenze e le limitazioni corrispondenti.

2. Lo stato di allarme sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al Congresso dei Deputati riunito immediatamente a tale scopo, senza la cui autorizzazione detto periodo non potrà essere prorogato. Il decreto determinerà l'ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione.

3. Lo stato di eccezione sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati. L'autorizzazione e proclamazione dello stato di eccezione dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l'ambito territoriale cui si riferisce e la sua durata, che non potrà eccedere i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo di uguale durata, con gli stessi requisiti.

4. Lo stato di assedio sarà dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta esclusiva del Governo. Il Congresso determinerà il suo ambito territoriale, durata e condizioni.

5. Non potrà procedersi allo scioglimento del Congresso durante la vigenza di alcuno degli stati compresi nel presente articolo, venendo le Camere convocate automaticamente qualora non fossero in periodo di sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri poteri costituzionali dello Stato, non potrà interrompersi durante la vigenza di tali stati.

Si se producesse alcuna delle situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati, quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente.

6. La dichiarazione degli stati di allarme, di eccezione e di assedio non modificheranno il principio di responsabilità del Governo e dei suoi agenti riconosciuto nella Costituzione e nelle leggi.

TITOLO VI

Del Potere Giudiziario

Articolo 117.

1. La giustizia emana dal popolo ed è amministrata nel nome del Re dai Giudici e Magistrati che fanno parte del potere giudiziario, indipendenti, inamovibili, responsabili e sottomessi unicamente all'imperio della legge.

2. I Giudici e Magistrati non potranno essere allontanati, sospesi, trasferiti né collocati a riposo, se non per le cause e con le garanzie previste dalla legge.

3. L'esercizio della potestà giurisdizionale in ogni tipo di processo, giudicando e facendo eseguire il giudicato, spetta esclusivamente alle Preture e ai Tribunali determinati dalle leggi, secondo le norme di competenza e procedimento che le stesse stabiliscono.

4. Le Preture e i Tribunali non eserciteranno altre funzioni che quelle indicate nel comma precedente e quelle che espressamente vengano loro attribuite dalla legge a garanzia di qualsiasi diritto.

5. Il principio di unità della giurisdizione è la base dell'organizzazione e funzionamento dei Tribunali. La legge regolerà l'esercizio della giurisdizione militare nell'ambito esclusivo delle Forze Armate e nei casi di stato di assedio, conformemente ai principi della Costituzione.

6. Si proibiscono i Tribunali di eccezione.

Articolo 118.

E' fatto obbligo di osservare le sentenze e le altre risoluzioni definitive dei Pretori e dei Tribunali, così come di prestare la collaborazione richiesta dagli stessi nel corso del processo e nell'esecuzione delle decisioni.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 119.

Il patrocinio sarà gratuito nei casi disposti dalla legge e, in ogni caso, a favore di coloro che dimostrino l'insufficienza di mezzi economici per sostenere le spese della difesa.

Articolo 120.

1. Gli adempimenti giudiziari saranno pubblici, con le eccezioni previste dalle leggi di procedura.
2. Il procedimento sarà prevalentemente orale, specialmente in materia penale.
3. Le sentenze saranno sempre motivate e saranno pronunciate in udienza pubblica.

Articolo 121.

I danni causati per errori giudiziari, così come quelli che siano conseguenza del funzionamento anormale dell'Amministrazione della Giustizia, daranno diritto a un indennizzo a carico dello Stato, conformemente alla legge.

Articolo 122.

1. La legge organica del potere giudiziario determinerà la costituzione, il funzionamento e governo delle Preture e Tribunali, così come lo statuto giuridico dei Pretori e Magistrati di carriera, che formeranno un corpo unico, e del personale al servizio dell'Amministrazione della Giustizia.

2. Il Consiglio Generale del potere giudiziario è l'organo di governo dello stesso. La legge organica stabilirà il suo statuto, il regime di incompatibilità dei suoi membri e le sue funzioni, in particolare in materia di nomine, promozioni, controlli e regime disciplinare.

3. Il Consiglio Generale del Potere Giudiziario sarà composto dal Presidente del Tribunale Supremo, che lo presiederà, e da venti membri nominati dal Re per un periodo di cinque anni. Di questi: dodici tra Giudici e Magistrati di tutte le categorie giudiziarie, nei termini che la legge organica stabilisce; quattro su proposta del Congresso dei Deputati e quattro su proposta del Senato, eletti in ambo i casi a maggioranza dei tre quinti dei suoi membri, tra avvocati e altri giuristi, tutti questi di riconosciuta competenza e con più di quindici anni di pratica nella loro professione.

Articolo 123.

1. Il Tribunale Supremo, con giurisdizione in tutta la Spagna, è l'organo giurisdizionale superiore in tutte le materie, salvo ciò che è disposto in materia di garanzie costituzionali.

2. Il Presidente del Tribunale Supremo sarà nominato dal Re, su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, nella forma determinata dalla legge.

Articolo 124.

1. Il Ministero Pubblico, senza pregiudizio per le funzioni conferite ad altri organi, ha per missione di promuovere l'azione della giustizia a difesa della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico tutelato dalla legge, d'ufficio o su istanza degli interessati, così come di vigilare per l'indipendenza dei Tribunali e ottenere di fronte a questi la soddisfazione dell'interesse sociale.

2. Il Pubblico Ministero esercita le proprie funzioni tramite organi propri conformemente ai principi di unità di azione e di dipendenza gerarchica e con rispetto, in ogni caso, di quelli di legalità e imparzialità.

3. La legge disciplinerà lo statuto organico del Pubblico Ministero.

4. Il Procuratore Generale dello Stato sarà nominato dal Re su proposta del Governo, sentito il Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

Articolo 125.

I cittadini potranno esercitare l'azione popolare e partecipare all'Amministrazione della giustizia tramite l'istituto della Giuria con le forme e relativamente a quei processi penali che la legge determina, così come nei tribunali consuetudinari e tradizionali.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 126.

La polizia giudiziaria è a disposizione dei giudici dei Tribunali e del Pubblico Ministero, con funzioni di accertamento dei reati e di scoperta e fermo del reo, secondo le modalità che la legge stabilisce.

Articolo 127.

1. I Pretori e Magistrati, come pure gli addetti alla Pubblica Accusa, nel tempo in cui svolgono le loro funzioni non potranno disimpegnare altri pubblici incarichi né appartenere a partiti politici o sindacati. La legge stabilirà il sistema e le modalità di associazione professionale dei Pretori, Magistrati e addetti alla Pubblica Accusa.

2. La legge stabilirà il regime delle incompatibilità dei membri del potere giudiziario, che dovrà assicurare la totale indipendenza degli stessi.

TITOLO VII

Economia e finanza

Articolo 128.

1. Tutte le risorse economiche del paese, nelle loro differenti forme e indipendentemente dalla loro titolarità, sono subordinate all'interesse generale.

2. Si riconosce la pubblica iniziativa nell'attività economica. Mediante legge potranno riservarsi al settore pubblico risorse e servizi essenziali, con particolare riferimento al caso di monopolio, e così pure decidere l'intervento imprenditoriale quando lo esiga l'interesse generale.

Articolo 129.

1. La legge stabilirà le forme di partecipazione degli interessati alla Previdenza Sociale e l'attività degli organismi pubblici la cui funzione interessi direttamente la qualità di vita o il benessere generale.

2. I pubblici poteri promuoveranno efficacemente le diverse forme di partecipazione nell'impresa e aiuteranno, mediante una adeguata legislazione, le società cooperative. Similmente stabiliranno le modalità per agevolare l'accesso dei lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione.

Articolo 130.

1. I pubblici poteri attenderanno alla modernizzazione e allo sviluppo di tutti i settori economici e, in particolare, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame, della pesca e dell'artigianato, al fine di equiparare il livello di vita di tutti gli spagnoli.

2. Con lo stesso fine si dispenserà un trattamento speciale alle zone di montagna.

Articolo 131.

1. Lo Stato, mediante legge, potrà pianificare l'attività economica generale per soddisfare le necessità collettive, equilibrare e armonizzare lo sviluppo regionale e settoriale e stimolare la crescita della rendita e della ricchezza e la sua più giusta distribuzione.

2. Il Governo elaborerà i progetti di pianificazione, in accordo con le previsioni che gli siano sottoposte dalle Comunità Autonome e con l'assistenza e collaborazione dei sindacati e delle altre organizzazioni professionali, imprenditoriali ed economiche. A tal fine si costituirà un Consiglio, la cui composizione e funzioni si specificheranno per legge.

Articolo 132.

1. La legge regolerà il regime giuridico dei beni del demanio pubblico o comunali, ispirandosi ai principi di inalienabilità, imprescrittibilità e insequestrabilità, così come la loro sclassificazione.

§ 2 La Costituzione Spagnola

2. Sono beni del pubblico demanio statale quelli che la legge determina e, in ogni caso, la zona marittimo-terrestre, le spiagge, il mare territoriale e le risorse naturali della zona economica e la piattaforma continentale.

3. Per legge si regoleranno il Patrimonio dello Stato e il Patrimonio Nazionale, la loro amministrazione, difesa e conservazione.

Articolo 133.

1. La potestà primaria di stabilire tributi spetta esclusivamente allo stato tramite legge.

2. Le Comunità Autonome e gli Enti locali potranno stabilire ed esigere tributi in accordo con la Costituzione e le leggi.

3. Ogni esenzione fiscale che interessi i tributi statali dovrà determinarsi in base alla legge.

4. Le pubbliche Amministrazioni potranno contrarre obbligazioni finanziarie e procedere a spese soltanto in dipendenza di leggi.

Articolo 134.

1. Spetta al Governo la predisposizione del Bilancio generale di previsione dello Stato e alle Cortes Generali il suo esame, modifica e approvazione.

2. Il Bilancio Generale di previsione dello Stato sarà annuale, comprenderà la totalità delle spese e entrate del settore pubblico statale, e in esso sarà indicato l'importo delle agevolazioni fiscali che interessino i tributi statali.

3. Il Governo dovrà presentare al Congresso dei Deputati il Bilancio Generale di previsione dello Stato almeno tre mesi prima della scadenza di quello dell'anno precedente.

4. Ove la Legge di Bilancio non venga approvata anteriormente al primo giorno del corrispondente esercizio economico, si considererà automaticamente prorogato il Bilancio dell'esercizio precedente fino all'approvazione del nuovo.

5. Approvato il Bilancio Generale dello Stato, il Governo potrà introdurre progetti di legge che comportino aumento della spesa pubblica o diminuzione delle entrate relative al medesimo esercizio.

6. Ogni proposta o emendamento che comporti aumento dei crediti o diminuzione delle entrate di bilancio richiederà per aver corso l'accettazione del Governo.

7. La Legge di Bilancio non può istituire imposte. Potrà modificarle qualora una legge tributaria sostanziale lo preveda.

Articolo 135.

1. Tutte le Pubbliche Amministrazioni adeguano i propri atti al principio della stabilità di bilancio.

2. Lo Stato e le Comunità Autonome non possono incorrere in un deficit strutturale che superi i limiti eventualmente stabiliti dall'Unione Europea per i suoi Stati Membri.

Una legge organica fissa il livello massimo di deficit strutturale consentito allo Stato ed alle Comunità Autonome, in relazione al rispettivo prodotto interno lordo. Gli Enti Locali devono mantenere un equilibrio di bilancio.

3. Lo Stato e le Comunità Autonome saranno autorizzati, mediante legge, ad emettere debito pubblico o contrarre crediti.

I crediti diretti a soddisfare il pagamento d'interessi e capitali dell'indebitamento pubblico delle Amministrazioni si considerano sempre compresi nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci ed il loro pagamento gode della priorità assoluta. Tali crediti non possono essere oggetto di emendamento o modifica, ove si conformino alle condizioni della legge di emissione.

Il volume di debito pubblico di tutte le Pubbliche Amministrazioni in relazione al prodotto interno lordo dello Stato non può superare il valore di riferimento stabilito dal Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

4. I limiti del disavanzo strutturale e del volume di debito pubblico possono essere superati solo in caso di catastrofi naturali, recessione economica o situazioni di emergenza straordinaria che sfuggano al controllo dello Stato e che pregiudichino seriamente la

§ 2 La Costituzione Spagnola

situazione finanziaria o la sostenibilità economica o sociale dello Stato, dichiarate con voto a maggioranza assoluta dei membri del Congresso dei Deputati.

5. Una legge organica attua i principi di cui al presente articolo, così come la partecipazione, nei rispettivi procedimenti, degli organi di coordinamento istituzionale fra le Pubbliche Amministrazioni in materia di politica fiscale e finanziaria. In ogni caso, prevede:

a) La distribuzione dei limiti del deficit e del debito tra le varie Pubbliche Amministrazioni, le circostanze eccezionali per il loro superamento, nonché la forma e i termini di correzione delle deviazioni che per entrambi si possono verificare.

b) La metodologia e la procedura per il calcolo del disavanzo strutturale.

c) La responsabilità di ogni Pubblica Amministrazione in caso di inosservanza degli obiettivi di stabilità di bilancio.

6. Le Comunità Autonome, in conformità ai rispettivi Statuti e nei limiti di cui al presente articolo, adottano le disposizioni necessarie per l'applicazione effettiva del principio della stabilità nelle proprie norme e decisioni di bilancio.

Articolo 136.

1. Il Tribunale dei Conti è il supremo organo di controllo della contabilità e gestione economica dello Stato così come del settore pubblico.

Dipenderà direttamente dalle Cortes Generali e svolgerà le sue funzioni per loro delega nell'esame e riscontro del Rendiconto Generale dello Stato.

2. I Rendiconti dello Stato e del settore pubblico statale saranno trasmessi al Tribunale dei Conti e saranno da questo verificati. Il Tribunale dei Conti, senza pregiudizio della propria giurisdizione, trasmetterà alle Cortes Generali una relazione annuale in cui, ove necessario, comunicherà le infrazioni o responsabilità che a suo giudizio si siano verificate.

3. I membri del Tribunale dei Conti godranno della stessa indipendenza e inamovibilità e saranno sottoposti alle stesse incompatibilità dei giudici.

4. Una legge organica disciplinerà la composizione, organizzazione e funzione del Tribunale dei Conti.

TITOLO VIII

Della organizzazione territoriale dello Stato

CAPITOLO PRIMO

Principi Generali

Articolo 137.

Lo Stato si organizza territorialmente in municipi, in province e nelle comunità Autonome che si costituiscano. Tutte tali entità godono di autonomia per la gestione dei rispettivi interessi.

Articolo 138.

1. Lo Stato garantisce la effettiva realizzazione del principio di solidarietà consacrato nell'articolo 2 della Costituzione, vegliando allo stabilimento di un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio spagnolo, tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situazioni delle isole.

2. Le diversità fra gli Statuti delle distinte Comunità Autonome in nessun caso potranno comportare privilegi economici o sociali.

Articolo 139.

1. Tutti gli Spagnoli hanno gli stessi diritti e obblighi in qualunque parte del territorio statale.

§ 2 La Costituzione Spagnola

2. Nessuna autorità potrà adottare misure che ostacolino direttamente o indirettamente la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni in tutto il territorio spagnolo.

CAPITOLO SECONDO

Della Amministrazione Locale

Articolo 140.

La Costituzione garantisce l'autonomia dei municipi. Questi godranno di piena personalità giuridica. Il loro governo e la loro amministrazione spetta ai rispettivi Consigli formati dai Sindaci e dai Consiglieri. I Consiglieri saranno eletti dai cittadini del municipio mediante suffragio universale, uguale, libero, diretto e segreto, nelle forme previste dalla legge. I Sindaci saranno eletti dai Consiglieri o dai cittadini. La legge regolerà le condizioni in base alle quali potrà operarsi un regime di Consiglio aperto.

Articolo 141.

1. La provincia è entità locale con propria personalità giuridica, costituita dal raggruppamento di più municipi, e ripartizione territoriale per lo svolgimento delle attività statali. Qualsiasi variazione dei confini provinciali dovrà essere approvata con legge organica dalle Cortes Generali.

2. Il governo e la amministrazione autonoma delle province saranno affidati a Deputazioni o ad altri Corpi di carattere rappresentativo.

3. Potranno costituirsi raggruppamenti di municipi diversi dalla provincia.

4. Negli arcipelaghi, le isole avranno inoltre proprie amministrazioni sotto forma di Capitoli o Consigli.

Articolo 142.

Le finanze degli Enti locali dovranno disporre dei mezzi sufficienti ad assolvere le funzioni che la legge assegna ai rispettivi Enti, alimentandosi fundamentalmente con propri tributi e con la partecipazione a quelli dello stato e delle Comunità Autonome.

CAPITOLO TERZO

Delle Comunità Autonome

Articolo 143.

1. Nell'esercizio del diritto alla autonomia riconosciuto nell'articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all'autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome in base a quanto previsto in questo Titolo e nei rispettivi Statuti.

2. L'iniziativa del procedimento diretto ad ottenere l'autonomia spetta a tutte le Deputazioni interessate o al corrispondente organo interinsulare e ai due terzi dei municipi la cui popolazione costituisca almeno la maggioranza del corpo elettorale di ogni provincia o isola. Tali requisiti dovranno essere verificati entro il termine di sei mesi dalle prime intese adottate allo scopo da alcuni degli Enti locali interessati.

3. Ove il procedimento non possa perfezionarsi, l'iniziativa non potrà ripresentarsi prima del decorso di cinque anni.

Articolo 144.

Le Cortes Generali per motivi di interesse nazionale, con legge organica potranno:

a) autorizzare la costituzione di una Comunità Autonoma quando il suo ambito territoriale non superi quello di una provincia e non siano presenti le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 143;

§ 2 La Costituzione Spagnola

- b) autorizzare o accordare, se del caso, uno Statuto di autonomia a territori che non siano ricompresi nella organizzazione provinciale;
- c) sostituirsi all'iniziativa degli Enti locali cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 143.

Articolo 145.

1. In nessun caso sarà ammessa la federazione di Comunità Autonome.
2. Gli Statuti potranno prevedere i casi, i presupposti e le modalità in base ai quali le Comunità Autonome potranno stipulare convenzioni fra loro per la gestione e prestazione di servizi delle medesime, come pure la natura e gli effetti della corrispondente comunicazione delle Cortes Generali. Negli altri casi gli accordi di cooperazione fra le Comunità Autonome dovranno ottenere l'autorizzazione delle Cortes Generali.

Articolo 146.

Il progetto di Statuto sarà elaborato da un'assemblea formata dai membri della Deputazione o dell'organo interinsulare delle province interessate e dai Deputati e Senatori eletti nell'ambito delle medesime e sarà trasmesso alle Cortes Generali per essere adottato come legge.

Articolo 147.

1. Gli Statuti, nel quadro della presente Costituzione, saranno la normativa istituzionale fondamentale di ogni Comunità Autonoma e lo Stato li riconoscerà e garantirà come parte integrante del suo ordinamento giuridico.
2. Gli Statuti di autonomia dovranno contenere:
 - a) la denominazione della Comunità che più corrisponda alla sua identità storica;
 - b) la delimitazione del suo territorio;
 - c) la denominazione, organizzazione e sede delle proprie istituzioni autonome;
 - d) le competenze assunte nel quadro stabilito dalla Costituzione e i principi per il trasferimento dei servizi corrispondenti alle medesime.
3. La riforma degli Statuti si conformerà al procedimento stabilito nei medesimi e in ogni caso richiederà l'approvazione delle Cortes Generali tramite legge organica.

Articolo 148.

1. Le Comunità Autonome potranno avere competenza nelle seguenti materie:
 - 1.º Organizzazione delle istituzioni di autogoverno.
 - 2.º Le variazioni dei confini municipali compresi nel loro territorio e, in generale, le funzioni che spettano allo Stato nei confronti degli Enti locali e il cui trasferimento venga autorizzato dalla legislazione sugli Enti locali.
 - 3.º Ordinamento del territorio, urbanistica e abitazione.
 - 4.º Le opere pubbliche di interesse della Comunità Autonoma sul proprio territorio.
 - 5.º Le ferrovie e strade il cui tracciato si svolga interamente sul territorio della Comunità Autonoma e, nello stesso ambito, i trasporti svolti con questi mezzi o via cavo.
 - 6.º I porti di rifugio, i porti e aeroporti sportivi e, in generale, quelli non addetti ad attività commerciali.
 - 7.º L'agricoltura e l'allevamento, in conformità all'ordinamento generale dell'economia.
 - 8.º I boschi e le miglorie forestali.
 - 9.º La gestione della tutela ambientale.
 - 10.º Progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti idraulici, canali e sistemi di irrigazione d'interesse della Comunità Autonoma; acque minerali e termali.
 - 11.º La pesca nelle acque interne, la raccolta dei frutti di mare e l'acquicoltura, la caccia e pesca fluviale.
 - 12.º Mercati locali.
 - 13.º L'aiuto allo sviluppo economico della Comunità Autonoma nel quadro degli obiettivi indicati dalla politica economica nazionale.
 - 14.º L'artigianato.

§ 2 La Costituzione Spagnola

- 15.º Musei, biblioteche, conservatori musicali d'interesse della Comunità Autonoma.
- 16.º Patrimonio artistico d'interesse della Comunità Autonoma.
- 17.º L'aiuto alla cultura, alla ricerca e, se del caso, all'insegnamento della lingua della Comunità Autonoma.
- 18.º Promozione e controllo del turismo nel proprio ambito territoriale.
- 19.º Promozione dello sport e della conveniente utilizzazione del tempo libero.
- 20.º Assistenza sociale.
- 21.º Sanità e igiene.
- 22.º La vigilanza e protezione sui propri edifici e impianti. Il coordinamento e ulteriori facoltà in relazione alle politiche locali nei termini che stabilisca una legge organica.

2. Le Comunità Autonome potranno in seguito ampliare le proprie competenze, nel quadro fissato nell'articolo 149, dopo il decorso di cinque anni e in seguito alla riforma dei loro Statuti.

Articolo 149.

1. Lo Stato ha competenza esclusiva nelle seguenti materie:
 - 1.º La disciplina delle condizioni fondamentali che garantiscano l'uguaglianza di tutti gli spagnoli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri costituzionali.
 - 2.º Nazionalità, immigrazione, emigrazione, Statuto degli stranieri, diritto di asilo.
 - 3.º Relazioni internazionali.
 - 4.º Difesa e Forze Armate.
 - 5.º Amministrazione della Giustizia.
 - 6.º Legislazione commerciale, penale e penitenziaria; legislazione processuale, senza pregiudizio delle necessarie specializzazioni che derivino dalle particolarità del diritto sostanziale delle Comunità Autonome.
 - 7.º Legislazione del lavoro, senza pregiudizio di una sua attuazione da parte delle Comunità Autonome.
 - 8.º Legislazione civile, senza pregiudizio del mantenimento, modifica e sviluppo da parte delle Comunità Autonome dei diritti civili, locali, tradizionali, o speciali, là dove esistano. In ogni caso le regole relative all'applicazione ed efficacia delle norme giuridiche, le relazioni giuridico-civili relative alle forme di matrimonio, la disciplina dei registri e atti pubblici, le basi delle obbligazioni contrattuali, le norme per risolvere i conflitti di leggi e la determinazione delle fonti del diritto, con rispetto, in quest'ultimo caso, delle norme di diritto locale tradizionale o speciale.
 - 9.º Legislazione sulla proprietà intellettuale e industriale.
 - 10.º Regime doganiero e tariffario; commercio estero.
 - 11.º Sistema monetario, valute, cambio e convertibilità, basi dell'ordinamento creditizio, banca e assicurazioni.
 - 12.º Legislazione sui pesi e misure, determinazione dell'ora ufficiale.
 - 13.º Principi fondamentali e coordinamento della pianificazione generale dell'attività economica.
 - 14.º Finanza e debito pubblico.
 - 15.º Sviluppo e coordinamento generale della ricerca scientifica e tecnica.
 - 16.º Sanità estera. Fondamenti e coordinamento generale della sanità. Legislazione sui prodotti farmaceutici.
 - 17.º Legislazione fondamentale e regime economico della Previdenza Sociale, senza pregiudizio dello svolgimento dei relativi servizi tramite le Comunità Autonome.
 - 18.º Le basi del regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e del regime statutario dei pubblici funzionari che, in ogni caso, garantiranno agli amministrati un trattamento comune davanti alle medesime; il procedimento amministrativo comune, senza pregiudizio delle specialità connesse all'organizzazione propria delle Comunità Autonome; la legislazione sulla espropriazione forzata; la legislazione di base sui contratti e sulle concessioni amministrative e sulle responsabilità di tutte le pubbliche Amministrazioni.
 - 19.º Pesca marittima, senza pregiudizio delle competenze che nella disciplina del settore vengano affidate alle Comunità Autonome.

§ 2 La Costituzione Spagnola

20.º Marina mercantile e immatricolazione del naviglio; fari costieri e segnali marittimi; porti di interesse generale; aeroporti di interesse generale; controllo dello spazio aereo, traffico e trasporti aerei, servizio metereologico e immatricolazione degli aeromobili.

21.º Ferrovie e trasporti via terra che attraversino il territorio di più di una Comunità Autonoma; regime generale delle comunicazioni; traffico e circolazione di veicoli a motore; poste e telecomunicazioni; cavi aerei, sottomarini e radiocomunicazioni.

22.º La legislazione, ordinamento e concessioni relative alle risorse e utilità idrauliche quando le acque scorrono attraverso più di una Comunità Autonoma e l'autorizzazione alle installazioni elettriche quando le relative utilità interessino altra Comunità o il trasporto di energia sia diretto all'esterno del suo ambito territoriale.

23.º Legislazione fondamentale sulla protezione ambientale, senza pregiudizio della facoltà delle Comunità Autonome di fissare norme protettive addizionali. La legislazione fondamentale sui boschi, miglioramenti forestali e pascoli.

24.º Opere pubbliche di interesse generale o la cui realizzazione interessi più di una Comunità Autonoma.

25.º Principi fondamentali del regime minerario ed energetico.

26.º Regime della produzione, commercio, detenzione e uso di armi ed esplosivi.

27.º Norme fondamentali del regime della stampa, radio e televisione, e in generale di tutti i mezzi di comunicazione sociale, senza pregiudizio delle facoltà che spettino alle Comunità Autonome nel loro sviluppo e attuazione.

28.º Difesa del patrimonio culturale, artistico e monumentale spagnolo dalle esportazioni e spoliazioni; musei, biblioteche e archivi spettanti allo stato, senza pregiudizio della loro gestione da parte delle Comunità Autonome.

29.º Pubblica Sicurezza, senza pregiudizio della costituzione da parte delle Comunità Autonome di forze di polizia nella forma che venga stabilita dai rispettivi Statuti e nel quadro di quanto disponga una legge organica.

30.º Disciplina delle condizioni per il conseguimento, rilascio e omologazione dei titoli accademici e professionali e norme fondamentali per lo svolgimento dell'articolo 27 della Costituzione, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi dei pubblici poteri in questa materia.

31.º Statistica per fini statali.

32.º Autorizzazione alla convocazione di consulte popolari per mezzo di referendum.

2. Senza pregiudizio delle competenze che le Comunità Autonome potranno assumere, lo Stato considererà il servizio culturale come dovere e attribuzione essenziale e, d'intesa con le medesime, agevolerà i rapporti culturali fra le Comunità Autonome.

3. Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato, potranno attribuirsi alle Comunità Autonome in virtù dei rispettivi Statuti. La competenza nelle materie che non siano assunte dagli Statuti di Autonomia, spetterà allo Stato, le cui norme in caso di conflitto prevarranno su quelle delle Comunità Autonome per quanto non venga attribuito alla loro competenza esclusiva. Il diritto statale sarà comunque suppletivo del diritto delle Comunità Autonome.

Articolo 150.

1. In materia di competenza statale le Cortes Generali potranno attribuire a tutte o ad alcune delle Comunità Autonome la facoltà di adottare per le medesime norme legislative nel quadro dei principi, basi e direttive stabiliti dalla legge statale. Senza pregiudizio della competenza dei Tribunali, in ogni legge quadro si stabiliranno le modalità del controllo delle Cortes Generali su queste norme legislative delle Comunità Autonome.

2. Lo Stato potrà, con legge organica, trasferire o delegare alle Comunità Autonome facoltà corrispondenti a materie spettanti allo Stato che per loro natura siano suscettibili di trasferimento o delegazione. La legge in ogni caso prevederà il corrispondente trasferimento di mezzi finanziari, così come le forme di controllo che lo Stato si riserva.

3. Qualora l'interesse generale lo esiga, lo Stato potrà adottare leggi che stabiliscano i principi necessari per armonizzare le disposizioni normative delle Comunità Autonome, anche in caso di materie attribuite alla loro competenza. Spetta alle Cortes Generali valutare questa esigenza, deliberando a maggioranza assoluta di ogni Camera.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 151.

1. Non sarà necessario far trascorrere il termine di cinque anni, cui fa riferimento il comma 2 dell'articolo 148, qualora la iniziativa del procedimento di autonomia sia concordata, nel termine di cui all'articolo 143, 2, oltre che dalle Deputazioni o organi interinsulari corrispondenti, dai tre quarti dei Municipi di ognuna delle province interessate che rappresentino almeno la maggioranza del corpo elettorale di ognuna di esse e detta iniziativa sia ratificata con referendum tramite il voto favorevole della maggioranza assoluta degli elettori di ogni provincia nei termini che una legge organica stabilisca.

2. Nel caso previsto dal comma precedente il procedimento per la elaborazione dello Statuto sarà il seguente:

1.º Il Governo convocherà tutti i Deputati e Senatori eletti nelle circoscrizioni comprese nell'ambito territoriale che intenda ottenere l'autogoverno affinché si costituiscano in Assemblea al solo fine di elaborare il corrispondente progetto di Statuto di autonomia tramite l'accordo della maggioranza assoluta dei suoi membri.

2.º Il progetto di Statuto approvato dalla Assemblea dei parlamentari verrà trasmesso alla Commissione Costituzionale del Congresso che, nel termine di due mesi, lo esaminerà col concorso e l'assistenza di una delegazione della Assemblea proponente per determinare di comune intesa la sua formulazione definitiva.

3.º Ove si raggiunga tale accordo, il testo ottenuto sarà sottoposto a referendum dal corpo elettorale delle province comprese nell'ambito territoriale del progettato Statuto.

4.º Se il progetto di Statuto è approvato in ogni provincia dalla maggioranza dei voti validamente espressi, verrà trasmesso alle Cortes Generali. Le Assemblee di entrambe le Camere decideranno sul testo mediante un voto di ratifica. Approvato lo Statuto, il Re lo sanzionerà e lo promulgherà come legge.

5.º Ove non venga raggiunto l'accordo cui si riferisce il numero 2 di questo comma, il progetto di Statuto sarà inoltrato come progetto di legge davanti alle Cortes Generali. Il testo approvato da queste sarà sottoposto a referendum del corpo elettorale delle province comprese nell'ambito territoriale del progettato statuto. Ove sia approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi in ogni provincia si farà luogo alla sua promulgazione nei termini di cui al numero precedente.

3. Nei casi di cui ai numeri 4 e 5 del comma precedente la mancata approvazione del progetto di Statuto da parte di una o diverse province non sarà di ostacolo alla costituzione delle Comunità Autonome progettate fra le rimanenti, nella forma che stabilisca la legge organica prevista dal comma i di questo articolo.

Articolo 152.

1. Negli Statuti approvati tramite il procedimento cui si riferisce l'articolo precedente, l'organizzazione istituzionale autonoma si baserà su una Assemblea Legislativa, eletta a suffragio universale in conformità a un sistema di rappresentanza proporzionale che garantisca, inoltre, la rappresentanza delle varie zone del territorio, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive e amministrative e un Presidente, eletto dall'Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, cui spettano la direzione del Consiglio di Governo, la suprema rappresentanza della rispettiva Comunità e quella ordinaria dello Stato nella medesima. Il Presidente e i membri del Consiglio di Governo saranno politicamente responsabili verso l'Assemblea.

Senza pregiudizio della giurisdizione spettante al Tribunale Supremo, un Tribunale Superiore di Giustizia sarà posto al vertice dell'organizzazione giudiziaria nell'ambito territoriale della Comunità Autonoma. Negli Statuti delle Comunità Autonome potranno stabilirsi i casi e le forme di partecipazione delle stesse nelle organizzazioni delle ripartizioni giudiziarie del territorio. Tutto ciò in conformità a quanto previsto nella legge organica sul potere giudiziario e nell'ambito della sua unitarietà e indipendenza.

Senza pregiudizio di quanto disposto nell'articolo 123, le successive istanze processuali, se del caso, si esauriranno davanti a organi giudiziari presenti nello stesso territorio della Comunità Autonoma in cui si trovi l'organo competente in prima istanza.

§ 2 La Costituzione Spagnola

2. Una volta sanzionati e promulgati i rispettivi Statuti, questi potranno venir modificati soltanto tramite i procedimenti stabiliti nei medesimi e con referendum dagli elettori facenti parte dei corrispondenti corpi elettorali.

3. Gli Statuti, mediante il raggruppamento di municipi limitrofi, potranno costituire proprie circoscrizioni territoriali che godranno di personalità giuridica.

Articolo 153.

Il controllo dell'attività degli organi delle Comunità Autonome sarà esercitato:

a) dal Tribunale Costituzionale quello concernente la costituzionalità delle sue disposizioni normative con forza di legge;

b) dal Governo, previo parere del Consiglio di Stato, quello relativo alle funzioni delegate di cui al comma 2, dell'articolo 150;

c) dalla giurisdizione amministrativa quello relativo alla amministrazione autonoma e alle sue disposizioni regolamentari;

d) dal Tribunale dei Conti quello economico e relativo al bilancio.

Articolo 154.

Un Delegato di nomina governativa dirigerà l'Amministrazione statale nel territorio della Comunità Autonoma, coordinandola, ove necessario, con l'amministrazione propria della Comunità.

Articolo 155.

1. Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all'adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi.

2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l'esecuzione delle misure previste nel comma precedente.

Articolo 156.

1. Le Comunità Autonome godranno di autonomia finanziaria per lo sviluppo e l'esecuzione delle loro competenze con riguardo ai principi di coordinamento con la finanza statale e di solidarietà fra tutti gli spagnoli.

2. Le Comunità Autonome potranno agire come delegate o collaboratrici dello Stato per la esazione, la gestione e la liquidazione delle entrate tributarie di questo, in conformità con le leggi e gli Statuti.

Articolo 157.

1. Le entrate delle Comunità Autonome saranno costituite da:

a) imposte cedute totalmente o parzialmente dallo Stato, addizionali su imposte statali e altre partecipazioni nelle entrate statali;

b) proprie imposte, tasse e contributi speciali;

c) contributi di un fondo di compensazione interterritoriale e altre assegnazioni a carico del Bilancio generale dello Stato;

d) rendite derivanti dal loro patrimonio e entrate di diritto privato;

e) proventi di operazioni di credito.

2. Le Comunità Autonome in nessun caso potranno adottare misure fiscali relative a beni situati fuori del loro territorio o che comportino ostacolo alla libera circolazione di merci e servizi.

3. Con legge organica potranno disciplinarsi l'esercizio delle competenze finanziarie enumerate nel precedente comma 1, le norme per la risoluzione dei conflitti che possano

§ 2 La Costituzione Spagnola

prodursi, nonchè le possibili forme di collaborazione finanziaria fra le Comunità Autonome e lo Stato.

Articolo 158.

1. Nel Bilancio Generale di previsione statale potrà stabilirsi un'assegnazione a favore delle Comunità Autonome in funzione dei servizi e attività statali che abbiano assunto e della garanzia di un livello minimo nella prestazione dei servizi pubblici essenziali in tutto il territorio spagnolo.

2. Al fine di correggere gli squilibri economici interterritoriali e rendere effettivo il principio di solidarietà, sarà istituito un Fondo di Compensazione destinato a spese di investimento le cui risorse verranno distribuite dalle Cortes Generali fra le Comunità Autonome e, se del caso, le province.

TITOLO IX

Del Tribunale Costituzionale

Articolo 159.

1. Il Tribunale Costituzionale è composto da dodici membri nominati dal Re; di questi, quattro su proposta del Congresso a maggioranza di tre quinti dei suoi membri; quattro su proposta del Senato con identica maggioranza; due su proposta del Governo, e due su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.

2. I membri del Tribunale Costituzionale dovranno essere nominati fra i Magistrati e i rappresentanti della Pubblica Accusa, professori universitari, funzionari pubblici e avvocati, tutti giuristi di nota competenza e con più di quindici anni di pratica professionale.

3. I membri del Tribunale Costituzionale saranno nominati per un periodo di nove anni e si rinnoveranno per un terzo ogni tre anni.

4. Lo stato di membro del Tribunale Costituzionale è incompatibile: con qualsiasi mandato rappresentativo; con le cariche politiche o amministrative; con lo svolgimento di incarichi direttivi in un partito o in un sindacato e col rapporto di impiego alle dipendenze dei medesimi; con l'esercizio della carriera di Giudice e di Pubblico Ministero e con qualunque attività professionale o commerciale.

5. Nell'esercizio del loro mandato, i membri del Tribunale Costituzionale saranno indipendenti e inamovibili.

Articolo 160.

Il Presidente del Tribunale Costituzionale verrà nominato fra i suoi membri dal Re per un periodo di tre anni, su proposta dello stesso Tribunale deliberata in seduta plenaria.

Articolo 161.

Il Tribunale Costituzionale ha giurisdizione in tutto il territorio spagnolo ed è competente a conoscere:

a) del ricorso di incostituzionalità avverso le leggi e le disposizioni normative con forza di legge. La dichiarazione di incostituzionalità di una norma giuridica di grado legislativo, che abbia fatto oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza condiziona quest'ultima, ma la sentenza o le sentenze in precedenza adottate non perderanno il valore di cosa giudicata;

b) del ricorso di amparo per violazione dei diritti e libertà menzionati nell'articolo 53, 2 di questa Costituzione e nei casi e con le forme che la legge stabilisca;

c) dei conflitti di competenza fra lo Stato e le Comunità Autonome o fra le medesime;

d) delle ulteriori materie attribuitegli dalla Costituzione o dalle leggi organiche.

2. Il Governo potrà impugnare di fronte al Tribunale Costituzionale le disposizioni e risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità Autonome. Il ricorso produrrà la

§ 2 La Costituzione Spagnola

sospensione della disposizione o risoluzione impugnata, ma il Tribunale dovrà ratificarla o annullarla in un termine non superiore a cinque mesi.

Articolo 162.

1. Hanno legittimazione:

a) per proporre ricorso di incostituzionalità, il Presidente del Governo, il Difensore del Popolo, 50 Deputati, 50 Senatori, gli organi collegiali esecutivi delle Comunità Autonome e, se del caso, le Assemblee delle medesime;

b) per proporre ricorso di amparo, ogni persona fisica o giuridica che invochi un legittimo interesse, come pure il Difensore del Popolo e il Pubblico Ministero.

2. La legge organica determinerà le persone e gli organi aventi legittimazione in tutti gli ulteriori casi.

Articolo 163.

Qualora in occasione di un processo un organo giudiziario consideri che una norma di grado legislativo, applicabile nel caso di specie e della cui validità dipenda la sentenza, possa contrastare con la Costituzione, porrà la questione al Tribunale Costituzionale nei casi, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla legge senza che in alcun caso possa prodursi sospensione.

Articolo 164.

1. Le sentenze del Tribunale Costituzionale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale dello Stato, unitamente alle opinioni individuali, ove espresse. Hanno valore di cosa giudicata dal giorno successivo alla loro pubblicazione e non sono in alcun modo ricorribili. Quelle che dichiarano la incostituzionalità di una legge o di una norma con forza di legge e tutte quelle che non si limitino a una valutazione di un diritto, hanno pienezza di effetti verso tutti.

2. Salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza, la legge manterrà vigore per la parte non interessata dalla incostituzionalità.

Articolo 165.

Una legge organica disciplinerà il funzionamento del Tribunale Costituzionale, lo Statuto dei suoi membri, il procedimento di fronte al medesimo e le condizioni per l'esercizio delle azioni.

TITOLO X

Della revisione Costituzionale

Articolo 166.

L'iniziativa per la riforma costituzionale sarà svolta alle condizioni previste dai comma 1 e 2 dell'articolo 87.

Articolo 167.

1. I progetti di revisione costituzionale dovranno venire approvati a maggioranza dei tre quinti di ogni Camera. Ove non si raggiunga un'intesa fra queste, serà tentata mediante la costituzione di una Commissione di conciliazione paritetica formata da deputati e senatori, che presenterà un testo da votarsi dal Congresso e dal Senato.

2. Ove non si ottenga l'approvazione mediante il procedimento di cui al precedente comma, e sempre ove il testo abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta del Senato, il Congresso potrà approvare la revisione a maggioranza dei due terzi.

3. La revisione approvata dalle Cortes Generali verrà sottoposta a referendum per ratifica quando lo richiedano, entro i quindici giorni dalla sua approvazione, un decimo dei membri di una delle due Camere.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Articolo 168.

1. Ove venga proposta la revisione totale della Costituzione o quella parziale riferita al Titolo Preliminare, al Capitolo secondo, Sezione prima, del Titolo I o al Titolo II, dovrà procedersi all'approvazione in via di principio con maggioranza dei due terzi di ogni Camera e quindi all'immediato scioglimento delle Cortes.

2. Le Camere elette dovranno approvare quanto deciso e procedere allo studio del nuovo testo costituzionale, che dovrà venire approvato a maggioranza dei due terzi in ogni Camera.

3. La riforma approvata dalle Cortes Generali sarà sottoposta a referendum per ratifica.

Articolo 169.

Non potrà iniziarsi la riforma costituzionale in tempo di guerra o durante la vigenza di uno degli stati previsti all'articolo 116.

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima.

La Costituzione garantisce e rispetta i diritti dei territori dotati di diritti locali tradizionali.

L'attuazione generale di tale regime tradizionale di autonomia sarà svolta, in ogni caso, nell'ambito della Costituzione e degli Statuti di Autonomia.

Seconda.

La dichiarazione di maggiore età di cui all'articolo 12 di questa Costituzione non pregiudica le situazioni garantite dai diritti locali tradizionali nell'ambito del diritto privato.

Terza.

La riforma del regime economico e fiscale dell'arcipelago delle Canarie necessiterà della preventiva Consultazione delle Comunità Autonome o, se del caso, dell'organo provvisorio di Autonomia.

Quarta.

Nelle Comunità Autonome in cui abbiano sede più di una istanza territoriale, gli Statuti di Autonomia potranno mantenere quelle esistenti, ripartendo fra esse le competenze, sempre in conformità con quanto disposto dalla legge organica sul potere giudiziario e nell'ambito della sua unità e indipendenza.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Prima.

Nei territori dotati di un regime provvisorio di autonomia, gli organi collegiali superiori, tramite intese prese a maggioranza assoluta dei loro componenti, potranno sostituire l'iniziativa che il comma 2 dell'articolo 143 attribuisce alle Deputazione provinciali o agli organi interinsulari corrispondenti.

Seconda.

I territori che in passato abbiano approvato con plebiscito progetti di Statuti di Autonomia e al momento della promulgazione di questa Costituzione siano dotati di regimi provvisori di autonomia, potranno procedere immediatamente nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 148, qualora così decidano a maggioranza assoluta i loro organi collegiali superiori, comunicandolo al Governo. Il progetto di Statuto sarà elaborato conformemente a quanto stabilito nell'articolo 151, numero 2, su convocazione dell'organo collegiale di autonomia provvisoria.

§ 2 La Costituzione Spagnola

Terza.

L'iniziativa del processo di autonomia da parte degli Enti locali o dei loro componenti di cui all'articolo 143, comma 2, s'intende differita a tutti gli effetti fino allo svolgimento delle prime elezioni locali a partire dalla entrata in vigore della Costituzione.

Quarta.

1. Nel caso della Navarra, e con riguardo alla sua incorporazione nel Consiglio Generale basco o al regime di autonomia basco che lo sostituisca, in luogo di quanto stabilisce l'articolo 143 della Costituzione, l'iniziativa spetta all'Organo locale tradizionale competente che adotterà la sua decisione a maggioranza dei membri che lo compongono. Per la validità di detta iniziativa sarà necessario inoltre che la decisione dell'Organo locale tradizionale competente venga ratificata tramite referendum espressamente indetto allo scopo e approvata a maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Ove l'iniziativa non venisse accolta, questa potrà essere ripresentata soltanto durante un diverso periodo di mandato dell'Organo locale tradizionale competente e, in ogni caso, dopo che sia trascorso il termine minimo fissato dall'articolo 143.

Quinta.

Le città di Ceuta e Melilla potranno costituirsi in Comunità Autonome qualora così venga deciso dai rispettivi Consigli Municipali mediante delibera presa a maggioranza assoluta dei loro membri e qualora così sia autorizzato dalle Cortes Generali mediante legge organica, alle condizioni previste all'articolo 144.

Sesta.

Qualora vengano trasmessi alla Commissione per la Costituzione più progetti di Statuto, questi saranno esaminati seguendo l'ordine di presentazione, e il termine di due mesi cui fa riferimento l'articolo 151 comincerà a decorrere dal momento in cui la Commissione abbia compiuto l'esame del progetto o dei progetti successivamente portati a sua conoscenza.

Settima.

Gli organismi provvisori di autonomia si considerano sciolti nei seguenti casi:

- a) quando vengano costituiti gli organi stabiliti dagli Statuti di Autonomia approvati conformemente a questa Costituzione;
- b) quando l'iniziativa del procedimento di autonomia non abbia successo per mancato realizzarsi dei requisiti previsti all'articolo 143;
- c) quando l'organismo non abbia utilizzato nel termine di tre anni il diritto riconosciutogli dalla prima disposizione transitoria.

Ottava.

1. Le Camere che hanno approvato la presente Costituzione, dopo l'entrata in vigore della medesima, assumeranno le funzioni e competenze in essa indicate, rispettivamente, per il Congresso e per il Senato senza che in nessun caso il loro mandato possa prolungarsi oltre il 15 giugno 1981.

2. Con riferimento alla previsione dell'articolo 99 la promulgazione della Costituzione viene considerata come presupposto costituzionale per la sua applicazione. A tal fine, a decorrere da detta promulgazione decorrerà un periodo di trenta giorni per l'applicazione della previsione di tale articolo.

Durante tale periodo, il Presidente del Governo, che assumerà le funzioni e competenze stabilite dalla Costituzione per tale carica, potrà optare per utilizzare la facoltà riconosciutagli dall'articolo 115, oppure dar luogo, tramite dimissioni, all'applicazione del disposto dell'articolo 99, rimanendo in tale ultimo caso nella situazione prevista al comma 2 dell'articolo 101.

3. Nel caso di scioglimento conformemente alla previsione dell'articolo e qualora non sia legalmente svolto quanto previsto agli articoli 68 e 69, si applicheranno alle elezioni le norme

§ 2 La Costituzione Spagnola

anteriormente vigenti, con la sola eccezione per ciò che si riferisce alle cause di ineleggibilità e incompatibilità per cui verrà applicato direttamente quanto previsto dalla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell'articolo 70 della Costituzione, così come quanto disposto dalla stessa rispetto alla età richiesta per il voto e quanto stabilito dall'articolo 69, 3.

Nona.

A tre anni dalla prima elezione dei membri del Tribunale Costituzionale si procederà per sorteggio alla designazione di un gruppo di quattro membri della stessa provenienza elettiva che debbano cessare ed essere sostituiti. A questo solo effetto si intenderanno raggruppati come membri della stessa provenienza i due designati su proposta governativa e i due nominati su proposta del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Nello stesso modo si procederà trascorsi altri tre anni fra i due gruppi non interessati al sorteggio precedente. A partire da allora ci si atterrà a quanto stabilito al numero 3 dell'articolo 159.

DISPOSIZIONE ABROGATIVA

1. Viene abrogata la legge 1/1977 del quattro gennaio per la Riforma politica, così come, per quanto non già abrogato dalla sopramenzionata legge, quella relativa ai Principi Fondamentali del Movimento Nazionale del 17 maggio 1958; la Carta degli spagnoli del 17 luglio 1945, la Carta del lavoro del 9 marzo 1938; la legge costitutiva delle Cortes del 17 luglio 1942; la legge di successione alla carica di Capo dello Stato del 26 luglio 1947; tutte queste modificate dalla Legge organica dello Stato del 10 gennaio 1967, e negli stessi termini quest'ultima e quella sul Referendum nazionale del 22 ottobre 1945.

2. Per quanto potesse mantenere qualunque vigore, si considera definitivamente abrogata la legge del 25 ottobre 1839 nelle parti che potessero concernere le province di Maya, Guipuzcoa e Biscaglia.

Negli stessi termini si considera definitivamente abrogata la legge del 21 luglio 1876.

3. Vengono similmente abrogate tutte quelle disposizioni che contrastino con quanto stabilito in questa Costituzione.

DISPOSIZIONE FINALE

Questa Costituzione entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del suo testo ufficiale nel Bollettino Ufficiale dello Stato. Verrà anche pubblicata nelle ulteriori lingue di Spagna.